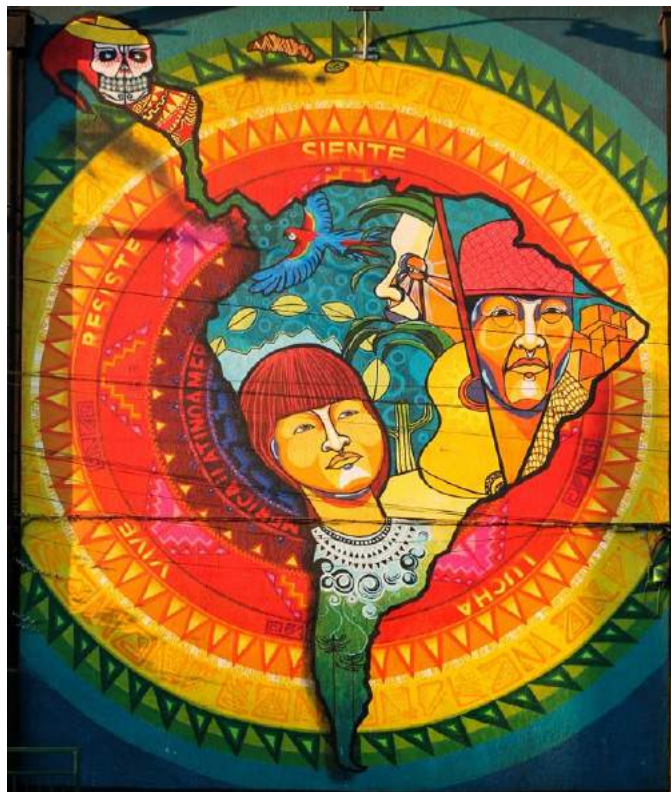




DOCUMENTOS del OCOTE ENCENDIDO

Nº 116. Marzo 2023

TERNURA DE LOS PUEBLOS



Comités Óscar Romero

INTRODUCCIÓN

En recuerdo de nuestro querido, pero ya desaparecido, Comité Romero de Madrid (y con permiso de Gioconda Belli) usamos las palabras “Ternura de los Pueblos” para denominar este Documento del Ocote Encendido, documento en el que, como hacía el Boletín de Madrid, queremos compartir denuncia política y noticias alternativas a los grandes medios de comunicación.

Agradecemos la colaboración del compañero chileno Hervi Lara, que se ha prestado a actualizar y ampliar su artículo Panorama en América Latina Hoy, escrito en agosto de 2022, porque *“los acontecimientos se han sucedido con extrema celeridad”*

Con una visión amplia del continente, parte de la idea de que *“la gran conquista del capitalismo ha sido la conquista del poder económico y del poder político con sus imaginarios y la forma de ver el mundo”* en un presente económico en el que no cuentan las personas. Y revisa la realidad de América Latina, analiza las diversas situaciones de diferentes países, concluyendo que no se puede desconocer la existencia de una crisis de alternativa ideológica, además de una crisis global implicada con un colapso ecológico, en la que los gobiernos progresistas deben mantenerse sin degradarse, para lo que requieren de la organización social, que posibilita la formación de la conciencia política. Como nos dice la Agenda Latinoamericana Mundial’2023: *“Hagamos comunidad, reencontrémonos si la adversidad nos ha distanciado, levantémonos para actuar y resistir, porque los tiempos difíciles no ha terminado”*.

También hemos querido reflejar algunas realidades que se van sucediendo en Perú, donde se atrevieron a elegir a un maestro rural y líder campesino como presidente; en Haití, cuya historia de subordinación se mezcla con las catástrofes y con la violencia institucionalizada; en Chile, con la derrota del Apruebo a la Propuesta de Constitución,... de las que se habla menos. Precisamente por eso las recogemos en este Ocote.

Nos merece, por lo mismo, atención la frontera sur de Estados Unidos. Espacio geográfico de dolor mezclado con esperanza, de ilusiones oscurecidas por las violaciones a los derechos humanos, donde como en otras fronteras se levantan muros y se militarizan las miradas; se suceden las muertes “que no importan”; los niños, son objeto de contrabando, y las leyes niegan las posibilidades de vida digna de numerosas personas que salen de situaciones de injusticia y violencia insoportables.

No podemos dejar de recordar a Enrique de Castro, fallecido en fecha reciente, cura obrero de la madrileña iglesia de San Carlos Borromeo. Dicen que, al igual que Monseñor Romero, con él Dios pasó por Vallecas. ¿Se puede afirmar algo más bonito de una Vida? Se lo ganó anunciando la gran fiesta del encuentro y la solidaridad, animando la “revolución participativa” codo a codo con marginados frente a la pobreza, los prejuicios, las exclusiones. Y a José Díaz, el sacerdote bueno, que enseñó bondad, acogiendo y auxiliando a los pobres y marginados, a los sufrientes de cualquier naturaleza. Compañeros en la parroquia, murió 14 días después. Desde aquí una abrazo fuerte a toda la comunidad de San Carlos Borromeo de Vallecas, Madrid.

Mientras elaborábamos este Documento hemos sabido también de la partida de este mundo de Toni Valcárcel, quien fue presidente del Comité Óscar Romero de Tarragona, a la vez que luchador incansable al lado de las causas justas. Dedicamos, pues, a su memoria y al comité en el que compartió compromiso este Ocote Encendido y un abrazo fraterno y sororal.

COMITÉS ÓSCAR ROMERO

ÍNDICE

Panorama de América Latina hoy, Hervi Lara	5
Perú	25
Haití. Para entender la crisis sociopolítica haitiana	29
Chile: Estallido social y derechos humanos	38
Frontera sur de Estados Unidos, Comisión de Migración ConVida20.....	42

Comités Óscar Romero

D.L.Z. 147-89

PANORAMA DE AMERICA LATINA HOY

HERVI LARA

Comité Óscar Romero—SICSAL Chile
Observatorio por el Cierre de la Escuela de
las Américas— SOAWatch— Chile.
Santiago de Chile, marzo de 2023

I. ANTECEDENTES DEL MUNDO DE HOY

1.- Lo sustantivo del actual momento histórico de América Latina es el tránsito desde la hegemonía estadounidense resultante del fin de la Guerra Fría, a un mundo bipolar entre USA y China, más algunos países con peso económico y geopolítico. Se suma la pérdida de influencia de la Unión Europea. USA y la UE (esto es OTAN) y sus alianzas político-militares no aceptan que emerja una gran potencia que cuestione el orden unipolar instaurado tras la caída de la URSS y la disolución del Pacto de Varsovia.

2.- Su efecto ha sido el resurgimiento de la Doctrina Monroe (de 1823) que, en su origen, significó una advertencia de USA a las potencias europeas sobre su “patrio trasero”. Se está dando una nueva expresión del “destino manifiesto”, término inventado por el periodista John O’Sullivan en 1845 para justificar la anexión de México y el imperialismo de USA, por ser el Pueblo Elegido. Es así

como USA ha legitimado la expansión territorial y económica: sería la voluntad de Dios. Se trataría de un destino divino que habría configurado la política de buscar nuevos territorios y mayor poder. Sería el pueblo predestinado a ser el Eje del Bien.

Aquello explica que después de los atentados del 11-9-2001, Bush haya impuesto la Guerra Preventiva en reemplazo de la Guerra Fría. Entonces dijo: “La libertad y la democracia han sido atacadas (...) La guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. (...) O se está con nosotros o con el terrorismo. (...) Dios está con nosotros (...) Dios bendiga a América”.

3.- Ya en 1997 se había formulado el “Proyecto para el nuevo siglo de USA, para una nueva política de fortaleza militar y rearme moral”: a) USA define quién es terrorista: aquella organización o Estado que atente contra los intereses de USA en cualquier lugar del mundo o ponga en peligro el suministro de materias primas esenciales como petróleo, gas, uranio y agua.

b) USA tiene el armamento más poderoso del mundo. Es el único país con derecho a tenerlo. Un país que pretenda equipararse será considerado terrorista.

c) USA se someterá a las decisiones de los organismos internacionales cuando estime que dichas decisiones están de acuerdo con sus intereses.

d) USA tiene el derecho de juzgar a los otros países, no según los hechos, sino según sus presuntas intenciones. Su actuación será en legítima defensa, aunque no haya habido ataque previo.

Estos planteamientos continúan hasta hoy. Trump lo expresó en el lema “América será grande otra vez”. Biden no ha trepidado en mantenerlos en la guerra de Ucrania.

4.- En este plano, pareciera no ser posible alcanzar un justo equilibrio, pues los medios de comunicación alimentan las neurosis colectivas. Es válido afirmar, por tanto, que estamos viviendo un “golpe de Estado” mundial. El poder económico ha cooptado al poder político. Y en el presente modelo económico no cuentan las personas. Por tanto, no hay democracia. La gran conquista del capitalismo ha sido la conquista del poder económico y del poder político con sus imaginarios y la forma de ver el mundo.

Pareciera, en consecuencia, imposible una democracia en medio del actual neoliberalismo y la presencia hegemónica de la economía especulativa, además de la concentración del poder económico y político. El capitalismo ha logrado convencer de que la idea de progreso, de bienestar, de riqueza, de libertad,

tiene que ver con la satisfacción de los deseos naturales individuales. La acumulación productiva y el lucro como lógicas sistémicas llevan a la depredación del medio, la explotación de una clase por otra y a la rivalidad y jerarquización entre los pueblos. Los gobiernos y las transnacionales aplican estas lógicas mediante la regulación del mercado fiscal, la imposición penal, la defensa de la propiedad privada de los medios productivos y la libertad de movimiento de los capitales, la competitividad mercantil y la explotación laboral.

5.- El neoliberalismo ha significado el paso de la Guerra Fría al predominio de una sola potencia y ha sido la edad de oro de la expansión del capital que ha pasado a un ciclo recesivo, así como de un relativo bienestar social a una economía de mercado. Para América Latina, las consecuencias han sido la crisis de la deuda desde fines de los “70 a inicios de los “80, lo que dio paso a las dictaduras militares que abrieron el camino a gobiernos neoliberales. La socialdemocracia ha adherido al neoliberalismo; desaparecieron los partidos comunistas; y la derecha ha impuesto la imposibilidad de conciliación entre crecimiento económico, distribución del ingreso y control de la inflación.

6.- El modelo de producción y consumo que orienta la economía altera el medioambiente, extinguiendo las especies y degradando los territorios. Las corporaciones privadas globales se apropian de materias primas esenciales, destacándose la industria alimentaria mundial. Las grandes potencias están

adquiriendo a gran escala zonas ricas en materias primas, tierras fértiles, zonas abastecidas de agua, privatizando bienes comunes y socavando la soberanía alimentaria.

Los Estados han sido convertidos en herramientas al servicio del capital transnacional. No obstante, la democracia, para ser tal, necesita incorporar la participación directa, porque un Estado democrático es regido por el poder popular y su fundamento ético mínimo de la sociedad democrática deben ser los derechos humanos.

7.- Es así como desde el fin del mundo bipolar, USA ha utilizado a la OTAN para expandirse por todo el planeta. Muestra de ello son el Tratado AUKUS (entre Australia, Reino Unido y USA); el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (entre Australia, India, Japón y USA); la Alianza de Inteligencia de los Cinco Ojos (entre Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y USA). Todos son instrumentos de expansión militar de OTAN en Asia y Oceanía. Se suma la viceministra de Defensa británica, quien ha anunciado (21-3-23), el envío de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Son éstas armas nucleares, de alta toxicidad y radiación, ya usadas en Yugoslavia e Irak. Con anterioridad, violando el Derecho Internacional Humanitario y propiciándose la extensión del conflicto, han sido enviados a Ucrania un escuadrón de tanques Challenger 2, tanques Leopard alemanes y tanques Abraham de USA.

8.- En este contexto, la jefa del Comando Sur del Ejército de USA ha señalado su atención hacia América Latina

por su riqueza en agua, litio, petróleo y otras riquezas naturales. Esto ha sido ratificado por el representante republicano Carlos Giménez, al afirmar que “durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de USA, hagan grandes inversiones en nuestra región”.

Coincidentemente, el Pentágono ha publicado su plan presupuestario para el año fiscal 2024: US\$ 842.000 millones, lo que podría indicar la intención de futuros conflictos bélicos bajo la doctrina de ganancias para el complejo militar-industrial. El alto presupuesto ha sido considerado crucial para “hacer frente al desafío de China, a la grave amenaza de la agresión rusa en Europa, o disuadir la amenaza de Irán, Corea del Norte y las organizaciones terroristas de Europa”. Así se entiende que USA y Corea del Sur realicen ejercicios militares para mantener la tensión con Corea del Norte como aliado de China. Hacia allí apunta la estrategia del poder económico capitalista occidental, al verse en dificultades en medio de la guerra de Ucrania, que ya ha cumplido un año.

9.- De manera sintética, se podría afirmar que hoy América Latina está viviendo con gobiernos progresistas por un lado y, al mismo tiempo, padece una arremetida de la derecha internacional. La incursión de China ha aparecido como socio comercial que sustituiría el poderío hegemónico de USA. Sin embargo, son motivo de preocupación las actividades empresariales de China en América Latina y cuyas obligaciones

extraterritoriales en relación a derechos humanos no son respetadas. Es así como el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinos, Derechos Humanos y Ambiente ha presentado 14 casos de empresas de la República Popular China ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) por transgresiones a los derechos humanos y ambientales en causas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile (en la Central Hidroeléctrica Rucalma), Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

II. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA REALIDAD DE AMÉRICA LATINA

2.1.-Ecuador.-

Ha vivido un estallido social gatillado por la inflación que no permite satisfacer la canasta básica, sin existir respuesta del gobierno y la extensión de la explotación usuraria de los Bancos hacia los agricultores.

Debe agregarse la endémica falta de trabajo y su secuela de desigualdades. El gobierno de Lasso reintegró al país al CIADI y se ha sometido a los dictámenes del FMI. La consecuencia ha sido la ausencia de inversión social.

La paralización de junio 2022 convocada por la CONIAE fue opacada por la prensa. Mientras, el movimiento social sufrió una fuerte represión. La prensa popular logró romper el cerco informativo y el gobierno se vio obligado a aceptar el diálogo con el movimiento social.

El levantamiento contra el gobierno ha continuado debido a su ineptitud ante los problemas sociales y económicos por los que ha seguido atravesando el país. Los movimientos sociales arguyen la búsqueda del respeto a los derechos humanos, respecto de los cuales el pueblo se encuentra en la indefensión.

Es el mismo gobierno el que genera inestabilidad, dada la ausencia de inversiones sociales y por hacer caer sobre el pueblo el peso de la crisis económica, política y de seguridad.

Se ha producido una fuerte crítica ante la militarización de las calles y la petición sustantiva se refiere a la salida de Lasso.

Posteriormente, se ha conformado una Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en empresas públicas y que ha aprobado un informe recomendando un juicio político en contra de Lasso. Se trata de una instancia no vinculante del Pleno del Parlamento y que ha acusado a Lasso de haber incurrido en delitos que afectan a la administración pública y a la seguridad del Estado. Una de las acusaciones se dirige hacia Danilo Carrera, cuñado de Lasso y quien no ejerce cargos en el gobierno. No obstante, él maneja las empresas públicas y decide qué firmas privadas puedan entrar en negocios con el Estado, además de “presunta conexión con el narcotráfico”. Esto, a cambio de coimas.

Con anterioridad, la ciudadanía había rechazado las preguntas de un referéndum constitucional y se había inclinado por candidatos progresistas para las

prefecturas provinciales como para las alcaldías.

El malestar popular se ha extendido hacia el ex Presidente Lenin Moreno, protagonista del Caso Sinohydro o “Ina Papers”: Moreno y otras 36 personas han sido acusados por la fiscalía del delito de cohecho en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Los acusados habrían recibido 76 millones de dólares en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, constructora de la obra.

Tras la acusación, Moreno y los demás han sido castigados con arresto domiciliario. Pero Moreno se encuentra “radicado” en Paraguay desempeñándose como comisionado del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Este último ha llamado a los actores políticos y sociales de Ecuador “a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”, adoptando una postura distinta a la que ha manifestado con Castillo en Perú, con Morales en Bolivia, con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

2.2.- Perú.-

El ascenso de Castillo a la Presidencia de la República fue precedido de una oposición violenta, racista, clasista y mentirosa. El hostigamiento de parte del Congreso ha continuado y ha mantenido al país en la ingobernabilidad. Se han sucedido cinco gabinetes, los cuales no han estado libres de personas inepetas.

El mismo Castillo se encuentra bajo cinco investigaciones penales. Las investigaciones se han extendido a su cuñada y a su esposa. El Congreso, en su

pretensión de aislar internacionalmente a Castillo, ha negado la autorización para que éste asistiera al cambio de mando de la Presidencia en Colombia. No obstante, Castillo ha recibido el apoyo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia, Chile, Ecuador y México, lo que a la postre ha aumentado el desprestigio del Congreso.

Castillo decretó la disolución del Congreso y de otras instituciones del Estado que le impedían gobernar. Pero no contó con el apoyo del resto de las instituciones estatales ni de las Fuerzas Armadas. Fue acusado de haber pretendido dar un golpe de Estado, siendo apresado por su propia guardia de seguridad mientras se dirigía a buscar asilo en la embajada de México. El Congreso ha dejado como sustituta a la Vicepresidenta Dina Boluarte.

Tras varios meses de protestas populares masivas desplegadas en el sur andino del país, los peruanos que votaron por Castillo han salido a las calles y han copado Lima exigiendo su liberación y restitución en el cargo de Presidente de la República, la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar el Estado, con la



secuela de decenas de muertos y miles de heridos graves, habitantes del “Perú profundo”.

El gobierno de Boluarte ha recibido la condena internacional por violaciones de derechos humanos y ha tensionado las relaciones con Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y especialmente con México. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TPC) han señalado que la vacancia de Castillo se dio en contra del mandato popular y se concretó en un golpe de Estado parlamentario.

El Congreso ha recibido un 94% de desaprobación de la ciudadanía, puesto que no ha viabilizado la superación del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000, sino que ha desembocado en tres décadas de neoliberalismo y en una debacle política e institucional con una seguidilla de gobernantes acusados de corrupción (uno de ellos se suicidó al momento antes de su detención).

En este momento, Dina Boluarte es la expresión de la ausencia del Estado de Derecho, el cual ha desaparecido desde el 7 de diciembre de 2022. Van 1.301 heridos y 77 asesinados por las fuerzas de seguridad. Por su parte, Castillo ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga su libertad y su reposición como Jefe de Estado.

2.3.- Guatemala.-

De acuerdo al censo nacional del año 2018, el 44% de la población es indígena. Los campesinos e indígenas buscan la conformación de un Estado Plurina-

cional y el Buen Vivir para asumir como “ciudadanos plenos”.

En este contexto, en vista de cercanas elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y concejales, en 2016 los indígenas crearon una organización política para participar en las elecciones y, de esta manera, podrían llegar a ser gobierno para realizar “cambios estructurales en el país racista”.

En 2018 inscribieron el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. En 2019 participaron en elecciones generales, alcanzando el cuarto lugar. No obstante, el tribunal electoral (TSE), arbitrariamente, se negó a la inscripción de la fórmula presidencial del partido indígena. Sólo permitió una diputación popular. Esta situación de racismo ha acrecentado la conflictividad social y política.

Una muestra del acontecer crítico de este país es la extensión de la tala de árboles, lo que ha redundado en la sequía de ríos y de pozos. La deforestación la realizan empresas madereras, mineras, hidroeléctricas, tanto nacionales como transnacionales. Actúan en forma ilegal sin recibir sanciones. La sequía provocada por estos procesos obligan a los campesinos a comprar el agua para el uso doméstico, lo que se ha transformado en un negocio lateral de las mismas empresas depredadoras.

Los Acuerdos de Paz tras la cruenta guerra civil, habían establecido la dignificación de las víctimas mediante exhumaciones; inhumaciones; medidas de verdad y de memoria; el resarcimiento cultural; la reparación sicosocial; la

restitución de viviendas, de tierras, de certeza jurídica e inversión productiva. Sin embargo, la Institucionalidad de la Paz ha sido cerrada. El Presidente Alejandro Gianmattei, acusado de corrupción, ha criminalizado a los magistrados y a funcionarios del Poder Judicial del Area Corrupción. Como secuela, los periodistas denunciantes de la corrupción han ido siendo encarcelados.

Los campesinos e indígenas insisten en la defensa de los recursos naturales, teniendo como plataforma “la defensa del agua, la tierra y el territorio”. Exigen al Estado que se haga responsable de la protección de la persona humana y de la familia, que garantice la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Como pueblos, se ven “dañados por la contaminación de agrocontaminantes que son esparcidos a través del aire y del agua envenenando los mantos acuíferos de nuestro territorio”, afirman. Y agregan que la constante deforestación significa la destrucción de ecosistemas, de la biodiversidad y de la vida humana. Exigen que el Estado defienda a su pueblo de las transnacionales y de los ingenios, los que no tienen derecho de apropiarse de los ríos.

2.4.- Honduras.-

Al igual que en los otros países de América Latina, en Honduras los pueblos indígenas también denuncian el corte ilegal del bosque, así como el no reconocimiento de los títulos ancestrales. Los campesinos carecen de acceso a derechos básicos como la salud, la

alimentación y la educación. Los proyectos extractivos generan violencia, destrucción y contaminación. Las mineras se apropian de las aguas de los ríos y la mayor parte de las fuentes de agua se han secado.

Como ejemplo de lo señalado: el grupo económico Emco Holding ha sido acusado de robar agua. Este grupo económico es el concesionario del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Al mismo tiempo, está construyendo nuevas instalaciones de la Academia Militar de Aviación ubicadas en la base Soto Cano (base militar compartida con el ejército de USA).

Honduras es uno de los países más pobres y desiguales del continente. Se requiere mejorar la gobernabilidad y la calidad de las instituciones, así como avanzar en la independencia del Poder Judicial, además de incrementar la capacidad del pueblo para exigir responsabilidad de parte de las autoridades así como de los funcionarios públicos y de los electos. Ello en vista de la necesaria prevención de la violencia y la aplicación de la ley para reducir la delincuencia.

Los conflictos de tierras entre campesinos y terratenientes son permanentes, habiendo aumentado los crímenes sufridos por los más pobres que se ven obligados a abandonar su país para deambular como migrantes. La migración es la secuela del otro problema grave de Honduras: la violencia y el crimen organizado. A modo de ejemplo: en 2021 unas comunidades de campesinos pusieron en práctica un proceso de recuperación de tierras y de producción de las mismas.

El Estado inició un requerimiento fiscal contra los campesinos, quienes fueron sobreseídos por el Juzgado de Letras. No obstante, la fiscalía y el empresariado apelaron contra este fallo porque no les favorecía, alegando que las tierras pertenecerían a la Empresa Exportadora del Atlántico, en circunstancias de que los campesinos poseían los correspondientes títulos de dominio. Esta y otras múltiples pugnas de similares características han desembocado en encarcelaciones y asesinatos de campesinos e indígenas. De allí los espectáculos dramáticos de oleadas de migrantes hacia la frontera de USA, imaginando una vida propia de seres humanos y que difícilmente se realiza.

2.5.- Haití.-

UNICEF ha señalado que en Cité Soleil uno de cada veinte niños se encuentra en riesgo de vida por desnutrición aguda grave y el 20% de los menores de cinco años padece desnutrición grave, modesta o moderada. El recrudecimiento de la violencia desde julio de 2022 ha restringido aún más el acceso a servicios sanitarios básicos. La inflación ha aumentado los precios de los alimentos.

Según ONU, entre el 8 y el 17 de julio de 2022, más de 471 personas han perdido la vida de manera violenta, han resultado heridas o se encuentran desaparecidas. Por la misma situación, tres mil personas han dejado sus hogares para huir de la violencia, siendo muchos de ellos niños no acompañados.

El objetivo de la violencia es crear caos y desencadenamiento

de una guerra civil. Desde marzo de 2021, más de 100 policías han sido asesinados. De estos, 20 lo han sido sólo en enero de 2023. Los policías nacionales han huido ante los ataques de las bandas de delinquentes. Mientras, el gobierno de facto ha permanecido indiferente ante la situación de inseguridad y miseria en un país que reúne las condiciones para un estallido de guerra civil. El gobierno ha llamado a la población a defenderse de los bandidos armados que intentan a la fuerza ingresar a las viviendas.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado la complicidad de la policía con algunas de las bandas criminales, dado el elevado nivel de impunidad existente. Por de pronto, 8 agentes de policía han sido acusados de participación en el asesinato del Presidente Jovenil Moïse, en julio de 2021. Además, 20 gendarmes ya se encuentran detenidos por la misma causa.

En aparente búsqueda de solución de la situación crítica, el 21 de diciembre de 2022 se conformó el “Consenso Nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes”, pero que es considerada como medida demagógica,



puesto que deja de lado problemas graves como la migración masiva: sólo durante febrero de 2023, desde República Dominicana fueron repatriados 13.090 haitianos. Es sabido que las repatriaciones masivas y las prácticas de trata y tráfico de migrantes haitianos que se registran en la frontera, se efectúan con la complicidad de militares dominicanos que ejecutan robos, violaciones, abusos sexuales y maltrato físico contra los migrantes.

2.6- Colombia.-

La elección de Gustavo Petro como Presidente y de Francia Márquez como Vice Presidenta marca un hito sin precedentes. Petro fue senador, fue alcalde de Bogotá, es ex integrante del grupo guerrillero M-19, es uno de los firmantes de la paz en 1991.

Francia Márquez es afrodescendiente y representa a los sectores siempre marginados. Uribe y Duque, con el Centro Democrático, cayeron ante el Pacto Histórico que logró unir a fuerzas políticas democráticas antes separadas.

El ex Presidente Duque, heredero de Uribe, dejó al país quebrado por un modelo económico que incrementó la pobreza; perpetró innumerables asesinatos; destruyó el Acuerdo de Paz; dejó al país inviable por la corrupción y la fuga de capitales. Máxima expresión del descalabro ha sido el paro armado de los paramilitares del Clan del Golfo, en mayo de 2022.

De acuerdo a información de INDEPAZ dada en agosto de 2022, el gobierno de Duque ha dejado como una de sus herencias a 957 líderes asesinados; 220

desaparecidos; 313 masacres; 555 secuestros; 545 eventos de desplazamientos forzados. El mismo organismo, al 15 de marzo de 2023 ha indicado que desde inicio del presente año ha habido 22 masacres perpetradas por las Auto-defensas Gaitanistas de Colombia. Lo anterior, sin contar con los más de 6.000 “falsos positivos”. Petro también ha buscado dialogar con el Clan del Golfo, con otras bandas de narcotraficantes y con la Segunda Marquetalia (que es la fracción de disidentes que firmaron la paz y luego abandonaron el proceso). No obstante los esfuerzos por alcanzar la paz, diariamente se producen nuevas masacres, a tal punto que, recientemente, Petro ha decretado el fin del Acuerdo de Paz con el Clan del Golfo y ha ordenado a las fuerzas de orden combatir a ese grupo paramilitar que ataca a campesinos indefensos.

En torno a los Acuerdos de Paz, el Instituto Kroc ha señalado que, al 2022, la reforma rural ha avanzado sólo 4%; el 37% de las disposiciones de los Acuerdos de Paz se encuentra en estado mínimo y el 15% aún no ha iniciado su implementación; 261 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

Por otra parte, el déficit fiscal asciende a \$83 billones adeudados a los programas sociales. El Programa de Ingreso Solidario por Pandemia destinado a cuatro millones de hogares, carece de financiamiento. La Fundación para la Libertad de Prensa ha confirmado que en el año 2022 ha habido 776 periodistas amenazados, 5 asesinados y 441 agredidos por la fuerza pública durante el ejercicio de su profesión.

En el 2021, un 39% de la población se encontraba en pobreza y se contabilizaron seis millones cien mil personas en extrema pobreza. Según la FAO, siete millones doscientos mil colombianos se encuentran con déficit de alimentos. El desempleo alcanza al 12,1%. Mientras, cuarenta y seis mil millones de pesos fueron destinados a contratos de imagen de Duque. Su equipo de comunicaciones se elevó de 15 integrantes a 54, para lo cual fueron usados dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Al mismo tiempo se ha implementado el fracking. Este se implica con la devastación de 700.000 hectáreas de selvas deforestadas.

Lo anterior decantó en el “estallido social”, incrementado por una reforma tributaria que ha afectado a la clase media y a los pobres. De allí la relevancia del Pacto Histórico que está centrado en la paz duradera, la que se haría perdurar a través de políticas de distribución y un categórico no al extractivismo, lo que se hace con la compatibilización entre el desarrollo de las empresas y el respeto al medioambiente.

El núcleo del planteamiento de Petro radica en el respeto a los Acuerdos de Paz, los que se abren a acuerdos con el ELN. Esta última organización ha pedido a Petro la entrega de los restos del cura guerrillero Camilo Torres. En su discurso de 14 de febrero de 2023, Petro estableció que el cambio que propicia es sinónimo de movilización popular. Ha aseverado que la doctrina de la guerra contra las drogas implementada por Nixon en la década de 1970 ha fracasado y la situación es hoy peor que antes.

Esto tiene como consecuencia la eliminación de la noción de “enemigo interno”; la detención del fracking; la decisión de convertir a Colombia en potencia del medioambiente; la valoración de los pueblos indígenas y afrodescendientes, dado que son los protectores de la tierra y los defensores del agua. Ellos son los cuidadores de la vida.

Petro también quiere disminuir la violencia a través del control de las armas y el control del mercado de la cocaína. Esto, porque ya en 2017 había cinco millones de armas en posesión de civiles y cuatro millones de ellas serían armas sin registrar. Como consecuencia, resulta indispensable un diálogo con México, porque la cocaína enviada a USA se devuelve en armas hacia Colombia vía México.

También el gobierno ha anunciado negociaciones con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las FARC en 2016. Son 2.000 combatientes que aún se mantienen en armas. Para continuar el proceso de paz, la fiscalía ha levantado las órdenes de captura contra 19 dirigentes que serán los negociadores.

A modo de síntesis sobre las expectativas en torno a Petro: el nuevo gobierno ha delineado una agenda de paz y, paralelamente, una agenda de medioambiente. Su viabilidad depende de su inclinación hacia los sectores populares o el riesgo de su inclinación hacia las élites. De allí la relevancia de Francia Márquez: la Vice Presidenta representa el vínculo con el pueblo, a fin de que el gobierno no se desvíe hacia el centro. Hasta ahora, Petro ha mostrado firmeza



y coherencia. Por de pronto, ha suspendido el alto al fuego bilateral que mantenía con el Clan del Golfo, grupo paramilitar que ha continuado masacrando campesinos. Y ha ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares en defensa del pueblo.

Para el desarrollo de las reformas que ha promovido, Petro ha manifestado la necesidad de apoyarse en las organizaciones populares. Sin embargo, dado el contexto de caminar al lado del abismo, la congresista Piedad Córdoba ha hecho públicos los movimientos de la derecha por desestabilizar al gobierno a través de un nuevo golpe blanco como los efectuados en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

2.7.- Brasil.-

El triunfo de Lula en la elección presidencial era necesario para el pueblo. Bolsonaro no reconoció el eventual triunfo de Lula y, presintiendo un enjuiciamiento por su gestión, afirmaba que se defendería “con pistola en mano”. La

represión ha sido una característica de Brasil y, particularmente en el gobierno de Bolsonaro han proliferado las masacres en las favelas y en los campos.

Recientemente, 340 familias han sido desalojadas de una comuna del MST en Río do Fogo, en Costa de Río Grande del Norte. Sin duda que uno de los aspectos de mayor gravedad es la destrucción de la Amazonía: sólo desde 2019 han sido destruidos más de 10 mil Km², con el apoyo de Bolsonaro y las ya sabidas secuelas para la humanidad.

Brasil es el país con mayor cantidad de hectáreas deforestadas para la agricultura y para pastizales. Uno de los Informes de Green Peace para América Latina indica que sólo en América del Sur se han perdido 55 millones de hectáreas de bosques en las últimas dos décadas.

El acceso de Lula a la Presidencia de la República ha marcado un hito decisivo en la correlación de fuerzas inclinadas hacia el ala progresista del continente.

Marcando una nueva línea de la dirección del país, el Presidente Inacio “Lula” da Silva y varios de sus ministros han acompañado al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra y al Grupo Gestor del Arroz Orgánico, organizaciones surgidas a fines de la década de 1990 del siglo pasado. Se trata de producción protectora del ambiente y de la nutrición, garantizándose la fertilidad del suelo y reduciendo los costos de las familias productoras de arroz. El núcleo de las políticas antineoliberales se encuentra en el desarrollo de las políticas sociales; la integración regional; el intercambio sur-sur. Pareciera indispensable, según el Presidente de Brasil, la institución de un frente amplio para superar el aislamiento de la izquierda.

Al mismo tiempo, organismos de gobierno han rescatado a 212 trabajadores en situación de esclavitud en plantaciones de caña de azúcar de una empresa prestadora de servicios que proporciona mano de obra a haciendas e ingenios. Anteriormente, ya habían sido rescatados 207 trabajadores de la producción de uva. Todos los trabajadores-esclavos carecen de escolaridad, son procedentes del nordeste y en su mayoría son negros. Al 17 de marzo de 2023 han sido rescatados 893 trabajadores en condición de esclavos. Ya en el primer trimestre de 2008, habían sido rescatados 1.456 trabajadores-esclavos. La empresa explotadora no les proporcionaba los elementos mínimos: les vendía las herramientas, no les daba alimentación y los obligaba a dormir en el suelo.

En la actualidad, el 79% de las familias brasileñas están endeudadas y trabajan sólo para pagar los intereses de sus deudas. Mientras, el Informe Forbes señala que 290 multimillonarios brasileños se encuentran exentos de impuestos. Tampoco paga impuestos la producción exportadora. El rentismo es el sistema que favorece al 0,1% que detenta las inversiones financieras. Es éste el motivo de la desindustrialización del país, puesto que es más rentable realizar inversiones financieras con poco trabajo y 0 riesgo.

En este contexto ha asumido la presidencia “Lula” da Silva, quien ha reiniciado la Operación Hambre 0 y postula más ingresos al pueblo para generar mayor demanda. Así las empresas tendrán público al cual vender su producción. Paralelamente, se mejoran las políticas sociales y la infraestructura.

La derecha y la oligarquía, usando a sectores fascistas seguidores de Bolsonaro, pretenden impedir la existencia de un gobierno al servicio del pueblo. Quieren continuar con el sistema financiero, depredando la Amazonía, propiciando la violencia, negando el acceso a la dignidad humana de las mayorías. Es por eso que el 8 de enero de 2023, una turba bolsonarista asaltó los tres poderes del Estado bajo el grito: “Brasil pertenece al Señor Jesús”. Bolsonaro se ha refugiado en USA, amparado por los republicanos de Florida, evitando las investigaciones criminales en su contra.

2.8.- Argentina.-

Se supone que su gobierno es progresista. Es la imagen que proyecta hacia el exterior. Argentina pasa por una aguda

crisis económica, implicada con la endémica corrupción de la política de ese país. Las organizaciones sociales han reiterado sus manifestaciones en busca de diálogo con las autoridades económicas. Piden, además, bonos de emergencia y el cese de las persecuciones.

La Vice Presidenta de la República ha sido enjuiciada bajo acusaciones de corrupción.

Y de lo que la prensa no habla es de la situación del pueblo mapuche, víctima del despojo tras la “Guerra del Desierto” en el siglo XIX y que hoy continúa acosado por las transnacionales. El pueblo mapuche defiende la naturaleza, el agua y los territorios sanos. Estos están siendo entregados por el Estado a capitales extranjeros: Benneton, Lewis, Qataries son favorecidos para su instalación en territorios abundantes en riquezas naturales. Reciben apoyo de políticos, de policías, de fuerzas armadas y de gendarmería: se ponen a su servicio para proteger sus intereses y reciben la inoperancia del sistema judicial que permite la violación de las leyes.

En este contexto se entiende que la Unidad Piquetera, organización popular, mantiene su movilización de manera permanente. En el último tiempo ha acampado frente al Ministerio de Desarrollo Social por los ajustes de dicha cartera y sus decisiones concentradas en un co-gobierno con el FMI, el cual exige reducción del déficit fiscal.

Macri ha continuado manteniendo el liderazgo de la derecha y su discurso apunta hacia los gobiernos populistas

“que distribuyen a cambio de destruir el futuro de la gente”.

2.9.- Chile.-

El Estado oligárquico se mantiene en pie, con distintas máscaras. La Constitución de 1980 ha sido el dique más patente para detener el progreso, la cultura, la democracia, la depredación del medioambiente.

La rebelión de octubre de 2019 remeció a todas las instituciones. Se encauzó la agonía del sistema mediante vías burocráticas. Fue una salida de emergencia: la Convención Constitucional. Pero el movimiento social ha carecido de dirección política. Emergió al margen y en contra de los partidos políticos, los que se han convertido en cúpulas de poder alejadas de las bases sociales.

El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 nuevamente puso en juego las alternativas ya tradicionales: pueblo – oligarquía; explotados-explotadores; democracia-dictadura; igualdad-privilegios. Ganó la derecha económica a través de sus lacayos políticos y por la fuerza de los medios de comunicación (todos en su poder) y de las mentiras en las redes sociales.

La propuesta de nueva Constitución sí habría podido permitir la apertura de condiciones para la organización sindical, social y política; el respeto a los derechos humanos; la protección del medioambiente, etc... Por presiones de partidos políticos de “izquierda” con representantes en la Convención Constitucional (Partido Socialista y Partido por la Democracia) y que reciben aportes económicos del gran empresariado, la asamblea no tuvo suficientes votos

para examinar los Tratados de Libre Comercio (TLCs), así como tampoco se reivindicó la nacionalización del cobre.

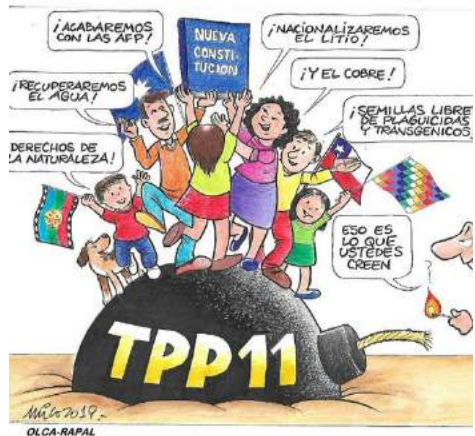
Es innegable que la actual izquierda carece de contenidos teóricos para ser revolucionaria. Como consecuencia, carece de ética, no tiene dirección, está fragmentada, se ha quedado en discusiones infantiles, se ha alejado de la realidad.

Allí radica la debilidad del actual proceso. Porque una Constitución es sólo un papel si no hay fuerzas sociales y políticas que conduzcan a hacerla realidad.

Tras la derrota de la propuesta de la Convención Constitucional democrática, se ha negociado una nueva propuesta constitucional con fuerte sesgo de la derecha: integrantes elegidos por los partidos políticos, por el Congreso y con explícitos temas que no se pueden abordar.

La columna vertebral de los cambios sociales propuestos por el gobierno de Boric se asienta en la reforma tributaria que permitiría financiarlos. Sin embargo, el Congreso se ha negado a la idea de legislar al respecto, con la complicidad de algunos diputados oficialistas. Esta fractura y fragmentación en el sistema político es expresión de un golpe blanco.

Nuevamente ha habido grandes incendios forestales que han afectado a poblaciones. Son fruto de plantaciones forestales de grandes empresas y que afectan los ciclos del agua, empobrecen las comunidades, aumentan la escasez hídrica, se pierde la biodiversidad vege-



tal y acuática, se afectan los suelos, se profundiza la precariedad laboral, se contaminan el aire y el agua.

Boric ha incorporado a su gobierno a la ex Concertación y es asesorado por reconocidos lobbystas al servicio del gran empresariado y de las transnacionales, a tal punto de haber aprobado el TPP11 a pesar de todos los argumentos en contrario dados por las organizaciones ambientalistas. En el plano internacional, el gobierno se ha alineado con los países de la OTAN, con las consecuencias inmediatas que posee esta falta de visión histórica.

2.10.- México.-

México también tiene un gobierno “progresista”. Pero la violencia y la corrupción impiden que camine más allá de los límites impuestos por los dueños del poder. Quienes se les enfrentan, deben estar dispuestos a las represalias.

A modo de ratificación y de síntesis de lo que sucede en México: sólo en 2022 fueron asesinados 13 periodistas. Aún

no se esclarecen las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa ni de las innumerables víctimas del narcotráfico y del tráfico de personas.

Entre sus objetivos, México tiene a la seguridad energética y alimentaria. En la misma línea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha indicado que el litio es mexicano, ha rechazado la importación de maíz transgénico y de otros alimentos insanos y señaló que no permitirá que las fuerzas armadas de ningún país, específicamente USA, pretenda intervenir en el territorio nacional. Esta declaración se debe ante la insistencia de legisladores de USA acerca de las fuerzas armadas de ese país puedan realizar operaciones en suelo mexicano para luchar contra el tráfico de fentanilo.

En el sureste de México han surgido grupos de autodefensa en las zonas rurales, donde la presencia del Estado es escasa o nula. Es ésta una reacción al contexto de inseguridad, a tal punto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado a más 50 grupos de autodefensa para hacer frente a asesinatos, extorsiones, amenazas y secuelas.

2.11.- Nicaragua.-

Según el Papa Francisco, el gobierno de Daniel Ortega es una “dictadura grosera”. Ortega lleva cinco mandatos como Presidente, tras elecciones cuestionadas por la “comunidad internacional” y realizadas en medio de protestas de organizaciones opositoras de varios países.

El 7 de noviembre de 2022, Ortega habría ganado las elecciones con 76%

de apoyo y más de 30 líderes opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales.

Ha habido una cuestionada decisión judicial para excarcelar a 222 opositores y deportarlos a USA, además de ser despojados de su nacionalidad. Se les acusa de “cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la destabilización económica”.

Curiosamente, a pesar de la falta de inversión y de ayuda internacional, el PIB ha aumentado 10,3% en el 2021 y un 5% en 2022. El promedio de vida es 74,51% y ha continuado mejorando gracias a los proyectos sociales, económicos y de producción.

Esto sucede a pesar de la falta de inversión y de ayuda internacional.

2.12.- Bolivia.-

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha pedido a los Estados y organizaciones internacionales liberar a la hoja de coca de la “injusta” asociación con las drogas, para industrializarla y convertirla en medicina y alimento de la humanidad.

En el interior del país, el Presidente Arce ha enfrentado de manera sistemática las protestas de las regiones, de opositores políticos y de grupos civiles que se oponen a sus leyes, a las que califican de autoritarias y persecutorias. Santa Cruz es el foco de la división del país y se mantiene en huelga desde octubre de 2022.

Las protestas de la oligarquía no reconocen que la economía ha crecido

9,4% al año 2022, ni el bono contra el hambre de 143 dólares a quienes no tienen ingresos. El gobernador de Santa Cruz, Camacho, quien ha sido puesto en prisión, sí hace alarde por el impuesto a la riqueza.

2.13.- Cuba.-

En abril de 2016, Barack Obama visitó La Habana, insistiendo en borrar la idea de que USA sería adversario de Cuba y enfatizando los obstáculos internos como causa de las dificultades cotidianas de los cubanos. Pero no estableció la relación con la permanencia del bloqueo de USA, ni la agresión a Venezuela, el país con mayor intercambio comercial de Cuba en ese momento.

En 2017, el gobierno de Trump sumó 243 medidas al bloqueo: corte en viajes y remesas, persecución a las navieras que transportaban combustible a Cuba, designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo e impedimentos a las transacciones financieras internacionales.

En 2018, Bolsonaro canceló un acuerdo por 11.000 médicos cubanos que trabajaban en Brasil, lo que aportaba 400 millones de dólares a Cuba.

En 2019, Washington explicitaba que las medidas contra Venezuela iban indirectamente contra Cuba “debido a que la administración de Guaidó tiene como objetivo no subsidiar más al régimen cubano”.

La crisis económica de Cuba, acrecentada por el Covid-19 y los huracanes, además del cierre del consulado de USA en La Habana, ha incrementado a los migrantes cubanos hacia USA, sumado

al imán de convertir en refugiados a los cubanos en territorio norteamericano y que ha provocado lo que Marco Rubio ha denominado “miedo al exilio cubano”. Esta situación ha obligado hoy a USA a conversar con Cuba, pero manteniendo el 90% de las sanciones impuestas por Trump.

Biden ha prorrogado la emergencia nacional vigente desde 1996.

2.14.- El Salvador.-

El Presidente Bukele tiene el poder total. Paradojalmente, su política de desarticulación de pandillas es aplaudida a pesar de que la ciudadanía ha cedido la democracia a cambio de una seguridad bajo Estado de Excepción, el cual permite las violaciones de derechos humanos. Es éste el resultado de una clase política surgida desde la guerra civil y que le ha fallado a su propio pueblo.

El 24 de febrero de 2023 se abrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), siendo inaugurado con la prisión de 4.000 presuntos pandilleros. Bukele se ha jactado de este “logro” y ha publicitado imágenes de los presos descalzos, rapados, con el torso desnudo, con tatuajes que hacen referencia a la Mara Salvatrucha, aparecen corriendo y con las manos esposadas.

El dramático espectáculo es comparable con los campos de concentración nazis, según el Presidente de Colombia. CECOT tiene capacidad para 40.000 presos, siendo un recinto cuestionado por organismos de derechos humanos que, además, denuncian detenciones arbitrarias y otras ilegalidades.

En marzo de 2022, Bukele declaró régimen de excepción como parte de su política de “combate a las pandillas”, a las que ha responsabilizado de la oleada de violencia luego de 87 homicidios durante un fin de semana.

El gobierno ha comprado 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan 8 pabellones dentro de un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 Km. de extensión protegidos por alambradas electrificadas.

Bukele lleva cuatro años en el poder, siendo prácticas recurrentes de su gobierno el secretismo y el ocultamiento de información. Es así que los salvadoreños no saben en qué consisten el Plan Nacional de Salud, el Plan Control Territorial, la adquisición de vacunas contra el Covid-19, y muchos otros casos.

El Estado de Excepción ha sido prorrogado 12 veces y, desde su implementación, hay 66.795 arrestados sin acusaciones ni derecho a defensa. Al mismo tiempo, tras innumerables gestiones de organismos de derechos humanos, el Instituto Médico Legal ha entregado los restos de 16 de las víctimas de la masacre de El Mozote (1981) y que fueron exhumados en 2016. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, cuando el Batallón Atacatl torturó y asesinó a todos los habitantes de dicho pueblo: 1.725 fueron las víctimas.

2.15.- Venezuela.-

El país lleva 4 años sin diplomacia con USA. Pero la guerra de Ucrania ha afectado la oferta y la demanda de energía alteradas por el conflicto bélico, sumándose las divisiones internas de la oposición al gobierno bolivariano y la

aproximación de las elecciones programadas para 2024. Esto ha significado “ablandar” el bloqueo terminando con el “gobierno interino” de Juan Guaidó. Biden se ha visto obligado a retirar el apoyo a sectores radicales que sí eran apoyados por Trump. A USA ha resultado improductivo no reconocer el legítimo gobierno de Maduro. De esta manera, Chevron ha reanudado sus operaciones con PDVSA, pero los bienes y los activos financieros en el extranjero han continuado bloqueados y la deuda del país sigue congelada.

Ha influido el avance de la alianza estratégica de Venezuela con Colombia, Brasil y Honduras, “segunda ola progresista”, en medio del agotamiento del modelo neoliberal como “fórmula de imposición de las oligarquías”. En este plano, el discurso de Maduro reitera que “el imperialismo no tiene nada que ofrecer a los pueblos, salvo miseria, desigualdad, represión, persecución y ausencia de democracia”.

Bajo el escenario de declinación histórica del imperialismo, se facilita la reunificación de las fuerzas progresistas en la región para así reavivar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por su parte, las alianzas de los sectores de derecha de América Latina buscan fracturar a los gobiernos democráticos y progresistas del continente y del mundo.

En este contexto, Venezuela busca “construir un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo nuevo, un destino común para la humanidad”. La revolución bolivariana es de orientación

nacional y popular, tras la crisis terminal del pacto de las élites que ha estado orientado al mercado internacional y subordinado a los intereses del imperia- lismo de USA.

En el Diálogo de Alto Nivel entre el Partido Comunista de China y los Partidos Políticos del Mundo, Maduro señaló haber llegado el momento de la historia y de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, neoliberal, al hegemonismo y al chanta- je económico.

III. CONCLUSIÓN

Hoy, pareciera que para USA lo más importante consiste en bloquear, frenar, impedir la transición hacia un mundo multipolar. Centroamérica y El Caribe siempre han sido zonas de dominio exclusivo y excluyente del imperio del norte, con intervenciones militares reiteradas. América Latina sigue siendo retaguardia y reserva estratégica de USA.

En este marco, Brasil resulta ser una pieza clave: Lula como Presidente signifi- caría un revés estratégico inaceptable. Chile, el modelo de los modelos del neoliberalismo está siendo subvertido, aunque con un gobierno que ha mostra- do debilidad ideológica y titubeos políticos.

USA necesita una victoria política que no sobrepase a los consensos y a la gobernabilidad del sistema, especial- mente cuando se encuentra en lucha con China por el dominio del planeta y China es el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Argentina y Perú. Las

anunciadas reformas económicas y políticas se están dando en el marco de la competencia entre las grandes poten- cias. Se agrega la amenaza de una guerra nuclear. Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, China ha realizado maniobras militares con “fuego real”, bloqueando así a Taiwán. Esto ha afec- tado a 18 rutas aéreas internacionales y más de 900 vuelos han sido obligados a modificar sus rutas. En vista de ello, los cancilleres del G-7 han señalado que “las acciones amenazantes de Pekín” pueden conducir a una escalada innecesaria. Por su parte, el Secretario de Estado de USA, Blinken, ha dicho que “el papel fundamental de las armas nucleares estadounidenses es disuadir los ataques nucleares” contra su país.

Dentro de este marco, no se puede desconocer la existencia de una crisis de alternativa ideológica: dadas las expe- riencias del pasado, se está en tránsito hacia un nuevo sistema de socialismo que no debería dejar de mantener la crítica marxista hacia el capitalismo. Tampoco es dable olvidar que la pande- mia y la crisis de Ucrania expresan la aceleración de la crisis del momento actual. El mundo está subordinado a las potencias.

En esta tensión, el dilema de los gobiernos progresistas es: o aliarse con el centro o la derecha haciendo maqui- llajes de reformas, o ser efectivamente revolucionarios. Las actuales olas pro- gresistas se están dando en medio de las crisis estructurales del sistema capitalista. Esta situación es la que demarca los límites de los gobiernos. Se corre el riesgo de que la política se

convierta en un espectáculo, en una mercancía más, en representación ficticia de la sociedad. Su traducción sería la degradación de la democracia.

El actual panorama muestra un futuro imprevisible, puesto que estamos viviendo una crisis global implicada con un colapso ecológico también global. La pandemia del Covid-19 es un síntoma de la crisis de la relación hombre-naturaleza.

El cambio climático, más la pandemia, más la guerra, dan como resultado la hambruna. Es necesario reconocer que la globalización ha contribuido a la inseguridad alimentaria: al haber sometido a los productores del mundo a la competencia económica, se ha conducido a la quiebra a millones de pequeños agricultores. Porque al haberse volcado la producción agrícola a los monocultivos más rentables, se han postergado cultivos de primera necesidad, debilitándose así a los sistemas de alimentación nacionales.

Por de pronto, la ONU ha afirmado que el conflicto de Ucrania está amenazando con condenar al hambre a decenas de millones de personas. A esta situación, la FAO la ha denominado “tsunami silencioso”: para eludir las alzas, algunos países han incrementado la producción de biocombustibles, lo que ha repercutido en los precios del maíz, del azúcar y otros productos indispensables.

Como ejemplo de lo antes señalado: Moscú y Kiev exportan 1/3 del trigo comercializado del mundo. Esto significa que aportan el 12% de las calorías alimentarias del planeta. Mientras, en

América Latina y El Caribe el hambre ha aumentado desde el 2000, a tal punto que entre 2019 y 2020 ha habido un aumento de 30% de personas padeciendo hambre. Sólo en 2021 se contabilizaron cincuenta y nueve millones setecientas mil personas con hambre en América Latina. La inseguridad alimentaria afecta al 41% de la población (esto es, 4 de cada 10 personas).

Dados el declive de la energía, el agotamiento de los minerales por el extractivismo indiscriminado y el cambio climático, el planeta ha entrado en la fase de colapso. La pandemia ha demostrado que el crecimiento indefinido, fruto del capitalismo desbocado, ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. La tierra, sometida por la globalización tecno-científica, ha sido conducida a una explotación voraz e incontrolada.

El paso siguiente en esta vía es el abismo. El 23 de septiembre de 2008 la Tierra sobrepasó en un 30% su capacidad de reposición de los recursos necesarios para las demandas humanas. Como corolario, se acrecientan las desigualdades, porque un 20% de los más ricos absorben el 84% de la riqueza y el 20% más pobre recibe el 16%. Quienes tienen poder económico, político y militar, siguen manteniendo su nivel de vida a costa de dejar fuera a la mayoría de los habitantes del globo. El hambre conduce al cambio de las reglas del juego: allí está la raíz de las explosiones sociales.

Ya nadie puede negar que el sistema extractivista está exprimiendo la vida, agota la tierra y expulsa a las personas.



Y cuando se vive bajo la línea de lo mínimo, es difícil mantener relaciones normales de humanidad.

En este panorama, los gobiernos progresistas deben mantenerse sin degradarse. Para ello, requieren de la organización social. Esta posibilita la formación de la conciencia política y de clase. La institucionalidad de gobierno sin el respaldo organizado y consciente de “la calle”, flotarás en el vacío, con el riesgo de “dulcificar” los límites del discurso para conseguir apoyos mayoritarios. Las inyecciones de neoliberalismo que colonizan a las juventudes y al pueblo en general, se transmiten por los medios de comunicación, por las redes, por los estudios, por los libros, etc... En consecuencia, los gobiernos progresistas tienen como principales desafíos la unidad del pueblo y del gobierno con el pueblo; deben crear las condiciones para fortalecer las acciones

en los distintos territorios; necesitan la elaboración de un paradigma del progresismo desde los pueblos, recogiendo las múltiples demandas; es indispensable la creación de redes de comunicación; se tiene que ir evaluando permanentemente lo que se está haciendo, enfatizando la dignidad como fin superior. Porque toda victoria que no se convierte en otra victoria, se convierte en derrota.

Los nuevos paradigmas deben pensarse para abrir cauce a los nuevos movimientos ecologistas, feministas, de género, indígenas, sin dejar de lado los paradigmas anteriores. Se trata de construir sin destruir.

PERÚ

LA OLIGARQUÍA PERUANA DERROCA AL PRESIDENTE CASTILLO

Manolo de los Santos*

El 6 de junio de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro Castillo Terrones, maestro rural que nunca había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más de 50,13 por ciento de los votos. Más de 8.8 millones de personas votaron por el programa de Castillo – que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva Constitución – frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador Alberto Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.

Desde ese día, aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un periodo de gran hostilidad para el nuevo presidente, intentando desestabilizar su gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a botar el comunismo, la Sociedad Nacional de Industrias (principal grupo empresarial

de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo.

En octubre de 2021, se hicieron públicas grabaciones que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del gobierno y a periodistas de izquierda.

La derecha en el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. Desde mi toma de posesión como presidente el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano, señaló Castillo en marzo de 2022. Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político; sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, enfatizó. Resulta que varios de estos legisladores, con apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado

*Codirector ejecutivo de People's Forum y miembro del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Artículo producido para Globetrotter

reuniendo para ver cómo modificar la Constitución con el fin de destituir rápidamente a Castillo.

La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante esos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el *statu quo*. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda.

La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos en favor, seis en contra y 10 abstenciones.

La votación se produjo poco después de que el país recibió el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Con-

greso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por incapacidad moral permanente debido a las denuncias de corrupción que se indagan. Castillo también anunció el inicio de un gobierno excepcional de emergencia y la convocatoria de una asamblea constituyente en nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la asamblea constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó toque de queda a partir de las 10 de la noche. Ésta, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.

Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En Lima estallaron manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.

El golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.



los equilibrios necesarios.

El otro camino, la otra alternativa, era intentar gobernar. Y Pedro Castillo, en el que —ahora es fácil decirlo— fue su primer gran error, escogió

gobernar.

El problema es que tenía que gobernar en la cancha (un sistema institucional perverso y totalmente inclinado y diseñado en detrimento de los intereses populares), con las reglas (la Constitución de Fujimori), y con el árbitro en contra (un Parlamento con mayoría fujimorista y minoría de izquierda).

Una vez que Pedro Castillo escogió intentar gobernar, se puso en marcha un proceso destituyente impulsado por el fujimorismo con la cobertura de los oligopolios mediáticos. Y obviamente nunca pudo gobernar con un Congreso ultrafragmentado al que tenía que pedir permiso hasta para nombrar ministros y ministras.

Pero el fujimorismo tenía un arma tan perversa como poderosa, el artículo 113 de la Constitución que establece entre las diferentes causas para la vacancia del Presidente (algunas son de sentido común como la muerte o renuncia) la “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

La primera moción de vacancia por permanente incapacidad moral llegó en

PERÚ ¿FUE GOLPE?

Katu Arkonada

Cuando el profe Pedro Castillo ganó la elección presidencial a Keiko Fujimori —en segunda vuelta y por un ajustadísimo margen de 50.125% contra el 49.875%, una diferencia de poco más de 40 mil votos en un país de 33 millones de habitantes—, tenía dos caminos posibles.

El primero, era sacar a la calle al pueblo de las regiones históricamente olvidadas por las élites políticas, económicas y mediáticas, frente a las clases medias y altas de la capital Lima, que con un 35% del padrón electoral, había sido quien tradicionalmente definía el Presidente del Perú. Sacar a la calle a un pueblo que demandaba una nueva Constitución en sustitución de la promulgada por Fujimori en 1993. Convocar a una Asamblea Constituyente que, frente al poder de un Parlamento unicameral pensado como contrapeso al poder presidencial, hiciera surgir un poder capaz de generar

noviembre, a tan solo cuatro meses de haber ejercido el cargo, siguió una segunda en marzo de 2022, y la tercera y última, este diciembre. Para ilustrar los *poderosos* argumentos de la oposición parlamentaria a Pedro Castillo no hay más que leer los 20 puntos de la segunda moción de vacancia, donde además de acusar a Castillo de mentir sistemáticamente, se afirma que “no ha reflexionado, y menos corregido su conducta; muy por el contrario, ha insistido en defender sus actos”. No hay más palabras, señoría.

Pero si tomamos cualquier definición en ciencia política de golpe de Estado (traducción del francés *coup d'État*), que normalmente se entiende por una usurpación (muchas veces violenta) del gobierno de un país, y que claramente podemos visualizar en lo sucedido en 2019 en el país vecino, la hermana Bolivia, podríamos afirmar que los únicos golpistas eran los que intentaron usurpar desde el poder legislativo el poder ejecutivo mediante mociones de vacancia por permanente incapacidad moral.

No es el objetivo de este breve análisis señalar a toro pasado los errores de Pedro Castillo: si gestionó mejor o peor la post pandemia y vacunación, si debía haber sido más duro o más inflexible tanto con la izquierda caviar como con sus (ex) aliados de Perú Libre, si Aníbal Torres tenía más o menos poder que el que debería como Presidente del Consejo de Ministros, menos aún si Pedro Castillo se equivocó al aislarse o buscar a la OEA como tabla de salvación/legitimación. Ni siquiera si había votos suficientes para la moción de vacancia o

fue torpe, por no decir suicida, su proceder en las últimas horas de su mandato.

Nada de lo anterior justifica el golpismo parlamentario del fujimorismo y sus aliados políticos, económicos y mediáticos, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional, y la soledad en la que lo dejó de una buena parte de la izquierda que sigue buscando revoluciones en su formato clásico del siglo XX, y no entiende (por no decir desprecia) lo popular y las formas de representación, llenas de contradicciones, que encuentra para disputar el poder.

Ahora le toca el turno a Dina Boluarte, la sexta Presidenta en seis años de un país que un día fuera gobernado por el Mariscal Santa Cruz. Ante ella la disyuntiva se repite por segunda vez (y si la primera ha terminado en tragedia con el encarcelamiento de Pedro Castillo, esperemos esta segunda no termine en farsa): o intenta gobernar y terminar el mandato en 2026, para lo que tendrá sin duda que pactar con los golpistas, que es una buena parte de su gabinete (y políticas), o adelanta las elecciones para colocar de nuevo la Asamblea Constituyente en el horizonte.

Mientras tanto, ya va siendo hora de cambiar la pregunta que Vargas Llosa hace en *Conversación en la Catedral* de “cuándo se jodió el Perú”, por la de quiénes jodieron el Perú. Al Perú lo jodieron, y lo siguen jodiendo, los golpistas políticos, económicos y mediáticos, con la complicidad de algunos sectores de la izquierda, que no respetan la voluntad de las mayorías sociales.

HAITÍ. PARA ENTENDER LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA HAITIANA

Renel Exento¹

Resumen Latinoamericano, 5.12.2022

INTRODUCCIÓN

La década 2010-2021 fue rica en hitos para la sociedad haitiana. El terremoto del 12 de enero de 2010, con su desfile de víctimas, fue el evento más visible y más publicitado². Siguió una fuerte movilización internacional en apoyo a las víctimas. Esta década no solo estuvo marcada por una catástrofe humanitaria. También fue la ocasión para un nuevo ajuste del orden neocolonial del Estado haitiano³. Este nuevo ajuste se caracteriza por un mayor control de las potencias imperialistas en el manejo del país, al punto que los términos «dominación» y «dependencia» quizás ya no sean suficientes para explicar la situación de la segunda república del Nuevo Mundo.

Tradicionalmente, la categoría de “país dominado” se refiere a un país en el que la burguesía y el Estado están mayoritariamente subordinados a los intereses de las potencias imperialistas. Los países que se encuentran en esta situación de vasallaje son numerosos y diversificados. Sin embargo, varios de ellos tienen un cierto nivel de autonomía institucional y el desarrollo de fuerzas productivas *relativamente egocéntricas*. Este es el caso de varias antiguas colonias en África, América Latina, Asia y otros lugares. En el caso de Haití, la subordinación ha tomado tal proporción que la categoría de “país dominado” no permite comprender la verdadera naturaleza de los vínculos que las potencias imperialistas mantienen con él. Este sometimiento es parte de una lógica de desintegración de la institucionalidad del país.

¹Estudiante de doctorado en estudios urbanos en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas (Inrs) en Quebec. Fuente: Alter Presse.

²Según estimaciones oficiales, el terremoto causó más de 220.000 muertos y 300.000 heridos.

³Varios especialistas de la sociedad haitiana sustentan la tesis, según la cual se ha atravesado una nueva fase en el proceso de subordinación del Estado haitiano a las fuerzas imperialistas. Es el caso de Darbouze (2022) en su entrevista en el nº 27 de los Nouveaux Cahiers du Socialisme; Lamour (2022) en el siguiente artículo: <<https://www.enquetaction.com/articles/sabine-lamour-les-acquis-du-mouvement-feministe-haitien-hypotheques-par-la-dynamique-politique-de-ces-10-dernieres-annees>>. Interpretamos este cambio como el enésimo “ajuste del estado neocolonial haitiano”. Véase también: Renel Exentus, «Palestina – Haití: del terrorismo colonial a la dominación neocolonial», *AlterPresse*, 17 de mayo de

Se ha vuelto insignificante en Haití que las embajadas de las potencias imperialistas, incluidos los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, se arroguen el derecho de cambiar los resultados electorales y legitimar a los líderes no elegidos. Estos poderes son abiertamente, y en todos los niveles, «gobiernos paralelos», incluso si esto excede claramente las leyes e instituciones del país⁴. En Haití, la palabra de los emisarios occidentales está dotada de un poder que no tiene en ningún otro lugar⁵. Este dominio es visible en el día a día, a través de la cooperación técnica, en casi todos los ministerios y en la ejecución de actividades de desarrollo en los barrios. Las instituciones reguladoras estatales, como la policía, son capacitadas y financiadas directamente por potencias extranjeras. Este dominio se extiende incluso a las elecciones del calendario electoral, el Ministro de Hacienda y el Director de la Policía Nacional.

BREVE HISTORIA DE LA SUBORDINACIÓN DEL ESTADO DE HAITÍ

Luego de la heroica victoria de los esclavos de Santo Domingo contra el ejército de Napoleón el 18 de noviembre de 1803, el nuevo estado enfrentó la hostilidad de las potencias capitalistas de la época, cuya economía se basaba esencialmente en la esclavitud. A pesar de sus rivalidades, las potencias ven en la creación del Estado de Haití el surgimiento de un enemigo común. Tanto Estados Unidos como las potencias europeas no reconocen el nuevo estado. De acuerdo con sus intereses basados en el sistema esclavista, acuerdan imponer un bloqueo a Haití.

Para salir del aislamiento internacional, las clases dominantes haitianas cumplieron, en 1825, con la orden judicial de Francia, que las obligaba a pagar indemnizaciones a los colonos esclavistas⁶. Apenas dos décadas después de la independencia, el país volvió a caer en

⁴ La imposición de Ariel Henry como Primer Ministro es parte de esta larga tradición de injerencia de las potencias occidentales en los asuntos internos de Haití. Para más detalles, véase Robenson Geffrard, “Bajo presión internacional, Haití cambiará su gobierno”, *Le Devoir*, 20 de julio de 2021 y Ginette Chéribin, *The rotten belly of the filthy beast*, Port-au-Prince, Université d’Etat d’Haití, 2014.

⁵ La denuncia de este estado de cosas por la renuncia, a fines de septiembre de 2021, del enviado especial para Haití proviene del corazón mismo del imperio estadounidense. “Pero, sobre todo, lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren, y lo que necesitan, es la oportunidad de trazar su propio rumbo, sin títeres internacionales y candidatos privilegiados pero con apoyo real para este camino. No creo que Haití pueda disfrutar de estabilidad hasta que sus ciudadanos tengan la dignidad de elegir verdaderamente a sus propios líderes de una manera justa y aceptable. Véase: «Carta de renuncia de Daniel Foote al secretario de Estado de los EE. UU. Anthony Blinken», *The Canada-Haiti Information Project*, septiembre-octubre de 2021, <<https://canada-haiti.ca/fr/content/la-lettre-de-demission-de-daniel-foote-au-secrtaire-detat-americain-anthony-blinken>>.

⁶ También es importante subrayar que estas clases dominantes fueron acorraladas, internamente, por las demandas de los nuevos “libres” con el objetivo de romper definitivamente con el sistema de plantaciones. Al aceptar pagar la indemnización, estas clases dominantes utilizaron el apoyo de los poderes para someter mejor las nuevas libertades. Acordaron compartir, con la burguesía francesa, la plusvalía extorsionada del trabajo de los agricultores.

la trampa de la subordinación. La joven nación estaba entonces esclavizada financieramente, hasta el punto de que una parte importante de su economía fue desviada por la burguesía financiera francesa a lo largo del siglo XIX⁷. Esta subordinación financiera, que encierra a la joven nación en el laberinto del subdesarrollo, continúa en el siglo XX bajo la ocupación estadounidense⁸. Además del control militar y político, Estados Unidos, a su vez, toma el control de las finanzas del país para expoliar y saquear los escasos recursos económicos del pueblo haitiano⁹.

Si bien la deuda neocolonial fue pagada a fines de la década de 1940, las clases dominantes continuaron aceptando el yugo del endeudamiento, especialmente durante el largo reinado de los

Duvalier¹⁰. Después de más de un siglo de esclavitud, solo parecen cómodos en la subordinación al imperialismo. Subrayemos que esta subordinación se hace a costa de la represión salvaje de las masas populares urbanas y rurales, que aspiran a la construcción de un modelo de sociedad alternativo al sistema (neo) colonial. De hecho, el endeudamiento no solo atrofió cualquier progreso económico y social de las clases trabajadoras urbanas y campesinas, sino que también sumió al país en una espiral de atraso y subdesarrollo¹¹. Esto puede explicar el colapso del Estado y la subordinación de Haití a las organizaciones de cooperación, así como a las organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

⁷ Varios trabajos de investigación, en Haití y en otros lugares, se han centrado en esta cuestión de la deuda de la independencia, pero la prensa occidental apenas la ha abordado. Durante el mes de mayo de 2022, el *New York Times* publicó varios artículos sobre el tema. Daba la impresión de que la prensa estadounidense acababa de descubrir la barbarie típica de la dominación occidental. Véase: Eric Nagourney, "6 hechos para recordar sobre las reparaciones pagadas por Haití a Francia", *New York Times*, 20 de mayo de 2022, <www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world...>; Gusti-Klara Gaillard, "Haití: hace 196 años, la "deuda de la independencia"", *Cadtm internacional*, 27 de agosto de 2021, <www.cadtm.org/Haiti-lly-a-196-ans-...>>

⁸ Frantz-Voltaire, *Poder negro en Haití*, Montreal, Éditions Cidihca, 1988.

⁹ Suzy Castor, *La ocupación estadounidense*, Port-au-Prince, Cresfed, 1988.

¹⁰ La relajación del yugo de la deuda duró muy poco. Luego del golpe de Estado de Magloire contra el gobierno de Estimé en 1950, el Estado retomó paulatinamente la senda del endeudamiento. Para más detalles, véase Gérard Pierre-Charles, *La economía haitiana y su vía de desarrollo*, Port-au-Prince, Ed. Henri Deschamps, 1993.

¹¹ Los informes del Banco Mundial suelen presentar el desarrollo social y económico de Haití a través de categorías macroeconómicas. En 2021, la Bm señala que "el país tiene un PIB per cápita de 1.815 dólares, el más bajo de América Latina y el Caribe, mientras que menos de la quinta parte del promedio de los países de la región tiene un PIB de 15.092 dólares. Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, en 2020, Haití ocupó el puesto 170 entre 189 países, <www.banquemondiale.org/fr/country/h...>. Desde nuestro punto de vista, el nivel de subdesarrollo también se explica por el hecho de que el país depende en gran medida del exterior para satisfacer sus necesidades básicas. Ni siquiera produce las principales herramientas rudimentarias para su economía de subsistencia. Esto sólo puede entenderse si se tiene en cuenta la larga historia de saqueos y rescates del país.

En 1986, las revueltas populares derriban la dictadura, pero la maquinaria del Estado neocolonial permanece intacta. Las orientaciones neoliberales de gobernabilidad, iniciadas desde la década de 1970, se vieron reforzadas por el regreso de Jean-Bertrand Aristide, en 1994, bajo la vigilancia de las fuerzas de ocupación estadounidenses y de la ONU. La aspiración popular a la democracia es entonces neutralizada por la coalición de la burguesía compradora haitiana y



las potencias imperialistas. De hecho, la población sólo tiene derecho a “una democracia sin la participación del *demos*¹²”, ¡una democracia títere!

El expolio continúa con la aplicación de nuevas medidas económicas, como la privatización de las industrias estatales, el retiro del Estado de la economía, la asociación público-privada y la consagración de la ley suprema del mercado. De 1980 a 2010, un ciclo de 30 años de purga económica neoliberal siguió a dos siglos de rescate financiero y rescate. El terremoto de 2010 no hizo más que dejar al

descubierto el desastre social y humanitario orquestado durante esta larga historia de despojo desvergonzado.

DÉCADA 2010: HACIA LA INVENCION DE UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD POS-NEOCOLONIAL

La década 2010-2020 está marcada por una importante protesta popular contra el nuevo ajuste del orden neocolonial.

La primera vuelta se desencadena al final del mandato del neoduvallierista Michel Martelly. Después de liderar el país como un autócrata, completamente subordinado a las principales embajadas occidentales y agencias internacionales, Martelly se enfrentó a una gran resistencia popular cuando intentó, en 2016, entregar el poder a un miembro de su partido a través de elecciones amañadas. Pero el importante apoyo internacional y local le permite mantener el poder al tener a su heredero aparente, Jovenel Moïse, elegido con menos del 20% del electorado. Mientras tanto, la gestión desastrosa de los fondos de PetroCaribe y la reconstrucción posterior al terremoto han exacerbado el saqueo y expolio de los bienes públicos. Además, las políticas neoliberales, reforzadas por los dictados del FMI y el Banco Mundial¹³.

¹² Nos inspiramos en la expresión de Franklin Midi “democracia asistida por el neoliberalismo”, “¡‘Transición democrática’ en Haití! – pero ¿democracia en qué estado? », *Caminos críticos*, vol. 6, núm. 1, 2017.

¹³ Durante la década de 2010, más de un millón de haitianos huyeron de su país. Abrumados por la desesperación, viajaron a varios países latinoamericanos como Brasil, Chile, etc. Véase Alain Saint-Victor y Renel Exentus, “Haiti:migration and overexploitation”, *New Cahiers du socialisme*, n.º 27, invierno de 2022.

Una segunda ronda de movilización se lanzó el 6 y 7 de julio de 2018 tras el anuncio del aumento del precio de la gasolina por parte del gobierno de Jovenel Moïse. Esta vez, la lucha es por las demandas sociales y la gobernabilidad del Estado. El retiro de las medidas sobre el aumento de la gasolina no es suficiente para calmar el ardor de las masas, que ahora exigen que el Estado rinda cuentas por el manejo de los fondos de reconstrucción. La población tiende entonces a radicalizarse hasta el punto de exigir un cambio en el sistema social y político. El rechazo al modelo de Estado neocolonial aparece de manera inequívoca cuando cerca de un millón de haitianos deciden marchar diariamente por todo el país. Esta lucha abre la perspectiva de construir un nuevo orden social, que se desmarca de la larga tradición capitalista colonial y neocolonial. Pero esta utopía tropieza, por la terquedad de las fuerzas conservadoras del *status quo*, tanto a nivel local como internacional.

LA RESPUESTA POLÍTICA DEL RÉGIMEN A LA PROTESTA POPULAR

La movilización popular no solo socavó el régimen del Parti haïtien *Tèt Kale* (Phtk), sino que también socavó los mecanismos de ajuste y reajuste de la dominación estatal neocolonial. La par-

ticipación directa de las principales embajadas y agencias transnacionales en la configuración de las instituciones haitianas ha quedado al descubierto. Por eso, a pesar del carácter puramente democrático de las reivindicaciones populares, los grandes medios de comunicación occidentales, que suelen promover *la democracia burguesa y el respeto de los derechos humanos* en determinados países, han cubierto muy poco estos acontecimientos en Haití¹⁴.

Con el apoyo de las embajadas y de las principales agencias internacionales como la ONU, el gobierno de Phtk ha optado por favorecer el terror para romper el estancamiento político. Atrapado en el saqueo y expoliación de bienes públicos, se mostró incapaz de demostrar un mínimo de justicia y responsabilidad¹⁵.

Ante la incapacidad de la policía para ejercer la represión, el poder inició un nuevo ciclo de represión y opresión por medio de los “señores de la guerra” o pandillas. De hecho, la movilización popular fue aplastada gradualmente por la removilización de los antiguos líderes de las pandillas y la creación de nuevas pandillas en apoyo del régimen.

El plan del gobierno para romper la movilización popular se hizo de dos maneras.

¹⁴ Durante el mismo período, la prensa principal difundió información sobre la llamada movilización a favor de la democracia en Hong Kong, mientras que los eventos en Haití fueron completamente ignorados.

¹⁵ Al mismo tiempo, tuvo lugar en República Dominicana un movimiento de protesta social contra la corrupción. A pesar de su dominio, el Estado dominicano dio una respuesta diferente a las demandas populares. Implementó juicios a algunos dignatarios implicados en corrupción. Esta parodia de justicia creó la ilusión de que las instituciones democráticas burguesas estaban funcionando bien.

La primera, a través de una estrategia que consistió en tomar el control, a través de bandas armadas, de territorios y barrios poblados en la región de Puerto Príncipe y en localidades de provincia. Al asediar estos lugares, las autoridades buscaban impedir que los habitantes participaran en el movimiento de protesta social y política.

La segunda, por una táctica que consistía en sembrar el miedo, tanto en la opinión pública como en los barrios controlados por los esbirros del régimen. De hecho, se trataba de disciplinar el cuerpo social mediante la instalación de un clima de terror permanente, hecho necesario para la supervivencia de la moda.

Es por ello que las pandillas se han embarcado en espectaculares actos de terror a gran escala. Realizaron saqueos y allanamientos en los barrios populares del área metropolitana, allanamientos que terminaron en más de una decena de masacres. Informes de organismos de derechos humanos y agencias internacionales han establecido que algunas operaciones de pandillas se beneficiaron de la colaboración activa de altos funcionarios del gobierno y algunas unidades de la Policía Na-

cional¹⁶. En el caso, por ejemplo, de la masacre de La Saline, informes de la ONU y organismos de derechos humanos documentaron la presencia de altos funcionarios del Ministerio del Interior y equipo policial en el teatro de operaciones, en apoyo a las pandillas.

El poder también ha reforzado el poder de las pandillas, proporcionándoles mucho dinero y municiones. En noviembre de 2019, Palacio Nacional envió al emisario Fritz Jean Louis, exsecretario de Estado, a los principales cabecillas de las pandillas en los suburbios del sur de Puerto Príncipe, con el objetivo de orientar sus acciones, a cambio de fuertes sumas de dinero¹⁷. También conoció y compró los servicios de diferentes bandas, como *Krisla*, *Izo* y *Ti Lapli*.

La lógica de consolidación de pandillas llegó a su clímax, cuando el gobierno de Phtk y sus aliados procedieron a federarlos bajo la etiqueta de “G9, familias y aliados”. En su informe de octubre de 2020, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió la iniciativa de la federación de pandillas como una forma de abordar el problema de la inseguridad¹⁸.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha tomado la iniciativa de

¹⁶ Informes de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos – Rnddh, 2019, 2022 a través del sitio web de la Rnddh: <<https://web.rnddh.org/>>; *La Saline: justicia para las víctimas. El Estado tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos*, Minujsth y Hcdh Portau-Prince Report 2019, <<https://minujsth.unmissions.org/si...>>.

¹⁷ Durante la campaña de distribución de efectivo, Fritz Jean Louis, emisario del Palacio Nacional, fue herido por el líder de la banda *Ti Lapli* por financiar bandas enemigas. “Haiti/Actividades de pandillas: Fritz Jean-Louis, emisario del Palacio, herido de bala durante negociaciones con “*Ti Lapli*””, *Gazette Haïti*, 24 de noviembre de 2019. Para más detalles, <<https://www.gazettehaiti.com/nodo/761>>.

¹⁸ Reagrupamiento de haitianos de Montreal contra la ocupación de Haití (Rehmonco), “Haití: el reverso de la federación de bandas armadas”, *Presse-toi à gauche*, 1 de septiembre de 2020.

desarrollar proyectos comunitarios en barrios controlados por las pandillas. Esto implica que la gobernabilidad por el terror de las pandillas no es solo una opción del Estado haitiano, sino que también forma parte de la agenda de la ONU y de las principales agencias internacionales que trabajan en el país.

El 7 de julio de 2021, luego de conflictos de clanes dentro del partido Phtk, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado misteriosamente en su residencia por un comando fuertemente armado. Es cierto que este evento se sumó a la crisis política del país. Pero la intervención de potencias internacionales, incluido Estados Unidos, permitió que el régimen de Phtk y sus aliados conservaran el poder, gracias al gobierno del terror.

Sin embargo, el expediente del asesinato de Jovenel Moïse fue, paradójicamente, considerado como una cuestión de seguridad nacional por parte del Estado americano¹⁹. La justicia estadounidense se apoderó del caso, aunque estaba estrictamente prohibido arrojar luz sobre las redes criminales transnacionales, posiblemente responsables de este acto atroz. La gestión del asesinato y reemplazo de Jovenel Moïse en el

aparato estatal haitiano fue más como el borrado de un *padrino*, que una investigación por la muerte de un presidente de la república. Este es el posible significado de la imposición de Ariel Henry como primer ministro por las embajadas occidentales y la ONU, a pesar de su presunta implicación en el misterioso asesinato de Jovenel Moïse. Mientras tanto, las iniciativas de diálogo ciudadano para liderar la transición política se han mantenido en jaque, en beneficio de los patrones de Phtk y las grandes familias de la burguesía compradora haitiana.

Continúa el apoyo incondicional de poderes y organismos internacionales a los líderes ilegítimos y corruptos en la cúpula del Estado, a pesar de que miembros del gabinete del primer ministro *de facto*, Ariel Henry, han exigido la liberación de los presuntos pandilleros detenidos. por la policía²⁰. Probablemente varios miembros del gobierno también estuvieron implicados en actos de secuestro y narcotráfico, incluidos el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior²¹. Es a costa de un clima de terror que se mantiene el estado neocolonial haitiano.

¹⁹ "Haití-Asesinato de Jovenel Moïse: la investigación criminal estadounidense transformada en un asunto de seguridad nacional, revela el diario Miami Herald", *AlterPresse*, 28 de abril de 2022, <www.alterpresse.org/spip.php?articl...>.

²⁰ "Haití-Justicia: la Rnddh documentó la presencia de familiares de Ariel Henry en la liberación de miembros de la pandilla 400 Mawozo arrestados por la policía", *AlterPresse*, 21 de marzo de 2022, <www.alterpresse.org/spip.php?articulo...>.

²¹ Maria Abi Habib, "El presidente haitiano elaboró una lista de narcotraficantes. Sus asesinos la capturaron", *The New York Times*, 12 de diciembre de 2021, <www.nytimes.com/en/2021/12/12/world...>; "Secuestro: el ministro del Interior, Liszt Quitel, ordenó el secuestro del pastor Jean Ferret Michel, según la Rnddh", *Gaceta Haití*, 21 de octubre de 2020, <www.gazettehaiti.com/index.php/node/5164>

CONCLUSIÓN

En suma, la crisis haitiana ha tomado la apariencia de una crisis del estado haitiano neocolonial. Los mecanismos reales ya no son capaces de mantener al Estado en la silla de montar. El ejército y la policía se están desintegrando, al punto de compartir las tareas de gestión y control del territorio con «señores de la guerra» cuyo papel está casi institucionalizado. La federación de pandillas, G9, familias y aliados, se ha convertido en el medio por el cual las autoridades resisten a las fuerzas populares de protesta contra el estado neocolonial en decadencia. Este plan cuenta con el apoyo de las principales embajadas occidentales y agencias internacionales.

Estos buscan legitimar al régimen multiplicando los llamados al diálogo y buscando el consenso entre los actores de la escena haitiana. Durante este tiempo, las masas urbanas y rurales están pagando el precio de un clima de terror, por haber exigido el fin del reinado del estado neocolonial en Haití. La violencia de la guerra, que opone las clases dominantes a las clases populares y campesinas, se traduce en cientos de miles de personas secuestradas y asesinadas. Al continuar apoyando el *statu quo*, las potencias occidentales, como Estados Unidos y Canadá, sólo están perpetuando una situación deplorable. Parece que han elegido su lado.



1791
A
G
O
S
T
O
2010

El diminuto Ayiti►
Tiene fuente de Tierra Alta.
Amaga un Sol
de luces relumbrantes.
Al brotar sus Estrellas→
también amaga su Luna.
Y cuando Sol y Luna
duermen:
Cielo y Tierra se rebelan
en Noches de Cimarronadas. (Julin, Agosto 2010)



CHILE: ESTALLIDO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Hervi Lara

Santiago de Chile, 25.10.2022

Para EL CIUDADANO *online*.

El Estado de Chile ha sido nominado como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Este hecho ha sido considerado como un logro del gobierno respecto de la proyección internacional del país. Al mismo tiempo manifestantes de la capital expresan que *“a tres años de la revuelta no hemos conseguido nada, seguimos sobreviviendo en este estado de miseria y explotación”*. Esto significa que pareciera que las autoridades actúan como si el estallido del 18 de octubre de 2019 no hubiera existido. Habrían pasado al olvido las desigualdades estructurales, las injusticias y los constantes atropellos a la dignidad. No obstante, no es posible olvidar que hubo decenas de personas que recibieron impactos de balines con plomo disparados por Carabineros; hubo innumerables contusos; se lanzaron toneladas de gas lacrimógeno y gas pimienta que provocaron quemaduras químicas en diferentes grados; los gases venenosos fueron causantes de abortos espontáneos y procesos de menstruación abundante. Desde el inicio de las manifestaciones, grupos de rescatistas llevaron a cabo más de 8.000 atenciones prehospitalarias y derivaciones a centros asistenciales.

En Carta a los Presidentes de los Partidos Políticos, Amnistía Internacional-Chile ha planteado que *“las demandas ciudadanas deben ser consideradas porque son legítimas, van en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y porque sin ellas no estaríamos viviendo este nuevo proceso histórico que hoy está en manos de los partidos políticos”*. El mismo organismo ha señalado que tras el estallido social miles de personas fueron violentadas por la fuerza pública, por lo que se han presentado 10.936 denuncias, de las que hasta hoy sólo se han registrado 16 condenas (0,1% de condenas) y no se ha investigado a los mandos estratégicos de Carabineros por su responsabilidad en el despliegue y sus graves consecuencias. Es un deber del Estado *“adoptar medidas de no repetición”*. En igual perspectiva, la actual senadora Fabiola Campillay, también víctima de la violencia de Carabineros durante el estallido social, abogando por los *“presos de la revuelta”* que continúan en prisión, ha solicitado al gobierno darles el indulto *“caso a caso”* para evitar pasar por el Congreso que ha dilatado legislar al respecto.

De acuerdo al Ministerio Público, en el contexto del estallido social las víctimas menores de 18 años ascienden a 2.178. De estas causas, el 56% han sido cerradas por el fiscal correspondiente. Son 5.558 las víctimas de violencia institucional según el mismo organismo. De esta cantidad, 1.938 fueron afectadas por armas de fuego. 674 sufrieron lesiones graves. 285 padecieron ataques oculares. De estas víctimas, 834 son niños, niñas y adolescentes. Los traumas oculares fueron los delitos que marcaron las manifestaciones, dejando a más de 400 personas con pérdida de uno de sus ojos y a dos personas que perdieron ambos ojos. Al respecto, ha habido 4.170 denuncias contra Carabineros. Hasta hoy no se ha avanzado en justicia ni se han esclarecido los hechos. La necesaria reforma o refundación de Carabineros se ha diluido y su entonces Director de Orden y Seguridad durante el estallido social, ha continuado como General Director y la institución recibe permanentes halagos de parte de las autoridades en medio de una solapada “huelga de brazos caídos” en relación a la responsabilidad directamente policial.

En el tercer aniversario del estallido social, el Presidente de la República recordó que *“el control policial de esos días sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir”*. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha afirmado que no existen condenas por delitos sexuales que involucren a policías, basándose en la constatación de 405

lesiones oculares; 504 torturas (que incluyen violencia sexual); 2.123 apremios ilegítimos; 5 homicidios. Estos datos no consideran las acciones con resultado de muerte producto de torturas y apremios ilegítimos, dado que no existe registro del universo total de víctimas. Dichas aseveraciones fueron negadas por representantes políticos de derecha y también por el General Director de Carabineros. Sobre estos casos sólo hay una condena por hechos ocurridos en Arica y otro caso en vías de juicio oral en Rancagua.

La Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional ha informado que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo 364 denuncias de violencia sexual ejercida por Carabineros. De estas denuncias, 258 son por desnudamiento y violencia sexual; 67 por abuso sexual con contacto; 27 por amenazas de perpetuar el abuso sexual; 12 por violación y abuso sexual agravado.

A través de la Ley de Transparencia, la empresa periodística CIPER solicitó información sobre la reacción institucional de Carabineros en relación a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Carabineros ha informado que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se habrían efectuado 565 sumarios por eventuales ilícitos. De éstos, el 84% hoy continúa en proceso. En 75 de los 90 sumarios ya cerrados no hubo sanciones porque no se determinaron responsabilidades. Hasta ahora, sólo 15 sumarios han culminado en castigos a 32 funcionarios: 4

oficiales, 26 carabineros de menor rango y 2 civiles contratados por la institución.

Una muestra de la descomposición moral de Carabineros de Chile ha sido el fraude económico que obligó a la desvinculación del alto mando. Similares situaciones de desfalcos han ocurrido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero en Carabineros, cara visible de la represión contra “el enemigo interno”, han sido significativos los numerosos retiros voluntarios, la disminución de nuevos postulantes y, especialmente, los funcionarios dados de baja: entre los años 2019 y 2020, han sido desvinculados 920 carabineros. 5 de ellos fueron críticos de la actuación de los uniformados en las manifestaciones públicas. Uno de éstos fue descubierto en una crítica efectuada por WhatsApp al General Director. 265 carabineros han sido exonerados mediante vías administrativas por consumo de alcohol; 76 por violencia intrafamiliar; 66 por consumo o tráfico de drogas; 56 por robos y hurtos en procedimientos policiales; 54 por agresiones a personas detenidas; 41 por no adoptar los correspondientes procedimientos policiales; 36 por abusos sexuales y violaciones; 35 por no respetar la cuarentena o el toque de queda; 28 por hechos relacionados con el estallido social; 24 por cohecho o solicitud de dinero a detenidos. SOLAMENTE 18 CARABINEROS HAN SIDO DADOS DE BAJA POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, A PESAR DE LAS 3.000 QUE-RELLAS EN CONTRA DE LA INSTITUCION. SU FORMALIZACIÓN HA ALCANZADO SÓLO AL 9,5%.

Los delitos cometidos por agentes estatales han sido confirmados por ONU, CIDH, HRW, AI y el INDH. El 29 de abril de 2021 fue presentada una acusación contra el ex Presidente Piñera ante la CPI para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. AI ha instado a las autoridades europeas sobre la importancia de presionar para que la Fiscalía y el Poder Judicial presenten toda la información de tal manera de esclarecer todos los hechos de violaciones de derechos humanos. Es necesario *“reparar a las víctimas y sus familiares, incluyendo una adecuada rehabilitación, atención y reparación a las víctimas de trauma ocular, respetando todos los estándares internacionales de reparación integral aplicables”*.

El “enemigo interno” continúa, porque las causas del estallido social no se han superado y no se visualizan políticas de solución. Es así como el proceso constituyente ha sido capturado por el Congreso y los partidos políticos, entidades contra las cuales se produjo el movimiento del 18 de octubre de 2019. Mientras existen 2.500.000 trabajadores informales, el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Según la ONG Techo, entre 2011 y 2019 los campamentos aumentaron 22%, llegando a 47.000 hogares. La crisis del Covid elevó esta cifra a más de 100.000. Recientemente, el Catastro Nacional de Campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha señalado que la cantidad de campamentos en el país se ha elevado a 1.091, con 71.961 hogares. De este número, el 48% se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 25% está bajo la línea de pobreza extrema,

lo que significa un déficit habitacional que afecta a 650.000 familias. El mismo Catastro agrega que respecto del año 2019 hay 355 campamentos nuevos con 29.112 hogares. El 56% de las viviendas de la Región Metropolitana tienen un espacio menor a 70 m² (mínimo para 4 personas, según la ONU). Según el Censo de 2017, 383.204 viviendas carecen de agua potable. Estudios de Fundación SOL indican que la mayor parte de los compromisos financieros son para alimentarse, vestirse, pagar cuentas básicas, educación y salud. En los últimos 40 años, las AFP (administradoras de fondos de pensiones) han acumulado US\$200.977 millones, equivalentes al 80% del PIB nacional. A junio de 2020 la pensión promedio era de \$195.000 (US\$250).

El pueblo de Chile seguirá siendo considerado “enemigo interno” por el gran empresariado y sus voceros de la derecha política que propiciaron la derrota del Apruebo a la Propuesta de Constitución de la Convención Constitucional. Las policías y las FFAA continuarán siendo sus cancerberos hasta que deje de ser “letra muerta” que la esperanza de una Constitución democrática que proponía que Chile fuera “un Estado social y democrático de derecho. (...) Una república democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.



FRONTERA SUR DE ESTADOS UNIDOS

Comisión de Migración. Convida-20
Fernando Bermúdez, Coordinador

En la frontera Sur de Estados Unidos (1.134 kms. de océano a océano) se está levantando un muro con barrotes de acero de 9 metros de altura.

Continúa la militarización. Hay casos de desapariciones y asesinatos de migrantes con total impunidad. La verdadera crisis de la frontera de EEUU con México no es la migración sino la militarización. En vez de acoger migrantes y refugiados el Gobierno USA envía más soldados y policías para controlar la frontera.

Exclama un migrante: *“Tuve sed y derramaste el agua antes de dármele, tuve hambre y me prohibiste la entrada a un país en el que todos los días se desperdician 1,500 toneladas de comida”.*

Multitud de personas, tratando de buscar sobrevivir, huyen de la violencia y del hambre en sus países de origen, causado por la injusticia y por el cambio climático (huracanes, inundaciones y sequías). Mujeres migrantes procedentes de México y Centroamérica están siendo abusadas, golpeadas, detenidas, encarceladas y muchas de ellas asesinadas. El resultado de este drama fronterizo son también miles de muertos en el desierto.

Con la legalización del asesinato transfronterizo por parte la fuerza policial (Patrulla Fronteriza y la oficina de Aduanas) aumenta el número de asesinatos. El 25 febrero 2020 la Corte Suprema declaró que si un agente federal mata a una persona del lado mexicano no tienen derecho sus dolientes a demandar al oficial que disparó. Esto es gravísimo pues con un muro que está hecho de barrotes de acero las balas pueden pasar al lado mexicano.

El año pasado se registró la llegada más numerosa de migrantes a Estados Unidos cruzando por Ciudad Juárez hacia El Paso (Texas). Entraron un promedio 2.460 personas por día. Tan sólo la noche del 11 de diciembre de 2022 más de 5.000 migrantes arribaron al área fronteriza del centro de El Paso, en la orilla norte del Río Bravo. La mayoría procedían de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. El flujo de migrantes es impulsado por la llegada masiva de migrantes, que se movilizan en caravana.

La situación desató una nueva crisis humanitaria en El Paso, Texas, donde los centros de retención están saturados y los albergues están abrumados por la cantidad de personas que requie-

ren un espacio para pasar la noche.

Organizaciones solidarias de El Paso han apoyado en los esfuerzos para des congestionar los centros de detención por este flujo significativo de migrantes. Pero la policía migratoria continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del llamado Título 42.

MUERTOS EN LA FRONTERA

Cada año mueren aproximadamente un promedio de 800 migrantes en su intento de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos han muerto ahogados en el Río Bravo, o al caerse desde los muros fronterizos o baleados por la Patrulla Fronteriza, o bien abandonados a su suerte por los “coyotes” o mafias de traficantes. Otros han perecido debido a las altas temperaturas en el inhóspito desierto.

En julio del 2022, cincuenta y tres migrantes murieron abandonados en un tráiler en el estado de Texas, y en septiembre nueve murieron al tratar de cruzar el río Eagle Pass, también de Texas.

En menos de tres años han sido expulsados de Estados Unidos más de dos millones de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos sobreviven en condiciones extremadamente difíciles en las ciudades fronterizas y en otros lugares de México. La mayoría son centroamericanos (guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses), también hay algunos hay haitianos.

Scott Wright, residente en El Paso, envió un extenso informe. Resumen lo

más relevante. Uno de los problemas en la Frontera Sur son los niños. Después de cuatro años de esperar una solicitud de registros abiertos del gobierno federal, El Paso Matters recibió los documentos que rodean la muerte del niño Felipe Gómez Alonso la primera semana de mayo de 2022. El niño tenía 8 años. Estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EEUU. Originario de la aldea chuj de Yalambojoch, en la región guatemalteca de Huehuetenango. Felipe y su padre fueron canalizados a una parte remota de la frontera sur, lejos de la asistencia médica.

La situación de los niños y niñas es crítica. Informes de The New York Times documentan un número creciente de Individuos armados sin escrúpulos que “cuidan” a menores migrantes no acompañados con el objetivo de traficar con ellos. Existe un contrabando ilegal de niños y niñas en ambos lados de la frontera y recopilan información sobre sus familias en los Estados Unidos.

Asimismo, informes recientes de nuestros socios en DHIA (Derechos Humanos Integrales en Acción), informa Scott, en Ciudad Juárez documentan las complejas realidades de los niños involucrados en actividades de contrabando ilegal en ambos lados de la frontera.

Los abogados de inmigración y los defensores de los inmigrantes denuncian las terribles condiciones de los centros CBP (Aduanas y Protección Fronteriza de USA).

La Patrulla Fronteriza está obligando a los solicitantes de asilo a dejar todas sus pertenencias en el muro fronterizo, incluidos sus documentos. Esto es grave

porque esos documentos (pasaportes, informes policiales, información médica...) pueden ser muy relevantes para sus casos de asilo.

A los haitianos, mexicanos y centroamericanos se les expulsa y en cambio se acoge a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos a quienes se le concede asilo. Todo con fines políticos. (P. Vidal Rivas).

La Patrulla Fronteriza no solo impide que pasen migrantes a Estados Unidos sino que mata a muchos de ellos. El pasado mes de marzo la patrulla fronteriza disparó a dos migrantes nicaragüenses cuando cruzaban el río a nado. Y allí murieron.

Ningún patrullero fronterizo, acusado de asesinar a migrantes, ha sido juzgado y condenado. Siempre salen diciendo



LA ADMINISTRACIÓN BIDEN AMPLÍA EL TÍTULO 42

La Administración Biden está ampliando el uso del Título 42 para negar asilo a los inmigrantes y deportarlos a México. Más de 1.000 miembros de las iglesias y la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU se dirigieron al presidente Biden para poner fin al Título 42.

que los migrantes los atacaron con piedras y que ellos dispararon en defensa propia. Más aún, se ha conformado un sindicato de patrulleros para defender a los asesinos y borrar todos los datos de denuncia que se presenten.

El Comité de Solidaridad Monseñor Romero de la Iglesia Episcopal San Mateo en Washington comparte: "Las expectativas del Presidente Biden, eran bastante buenas en torno a la inmigra-

ción, pero no hemos visto nada bueno, sino todo lo contrario, más mentiras, persecuciones e impotencia frente al sistema. La situación sigue más o menos igual que con Trump”.

Un nuevo informe de la organización Human Rights First critica al Gobierno de Biden por encarcelar a decenas de miles de solicitantes de asilo en prisiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos donde enfrentan, entre otras cosas, períodos prolongados de detención, abusos físicos y psicológicos, atención médica inadecuada, conductas racistas y falta de acceso a asistencia legal y servicios lingüísticos. La organización afirma que la detención de los solicitantes de asilo genera costos innecesarios y constituye un trato cruel y una violación de las leyes estadounidenses e internacionales.

Una nueva demanda federal busca poner fin a la política del gobernador de Texas de encarcelar en masa a los inmigrantes que cruzan la frontera. La demanda argumenta que esta práctica anula los poderes de aplicación de los estados y se dirige específicamente a los inmigrantes latinos y negros.

El presidente mexicano López Obrador mostró su descontento con la decisión de EEUU de no invertir en los planes de México para apoyar a los agricultores mexicanos y centroamericanos al inicio de su gira centroamericana en Guatemala. López Obrador comentó que EEUU descuida la región mientras asigna miles de millones para Ucrania y esto choca con su compromiso de abordar las causas profundas de la migración.

Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco hace nada por los migrantes centroamericano que cruzan el país. La Casa Tochán, de Ciudad de México, denuncia esta situación, mientras acoge y orienta a los que van de paso hacia el Norte.

EL QUEHACER DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN DE CONVIDA-20

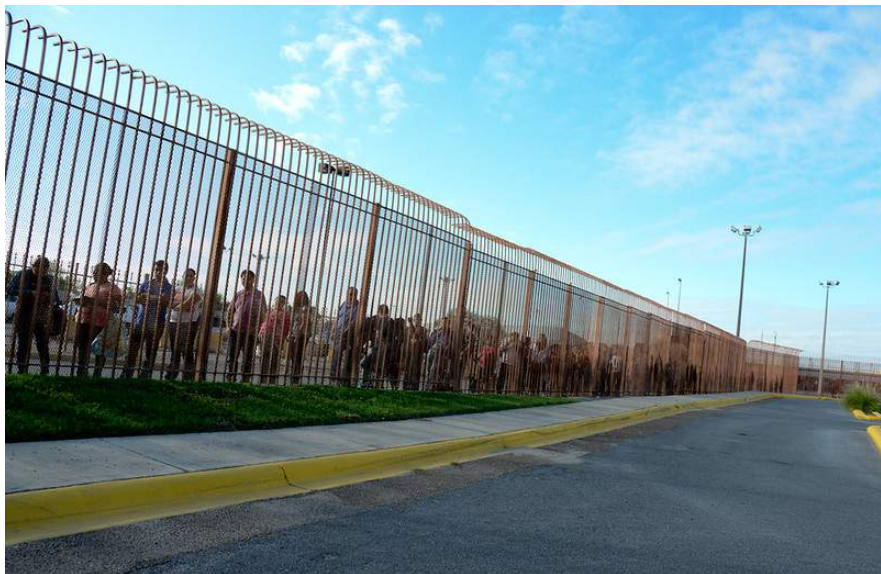
(Scott, Ana María y P. Vidal)

Ante esta realidad algunos miembros de la comisión de Migración de Convida20 nos reunimos para ver qué hacer. Acordamos denunciar estos hechos, a fin de que nunca más se vuelvan a dar.

Se han hecho: marchas con ayunos, vigiliyas y visitas al Senado y Congreso; pero no se ha logrado nada; al contrario, se ve un pueblo desanimado y casi adormecido por los engaños de muchas promesas.

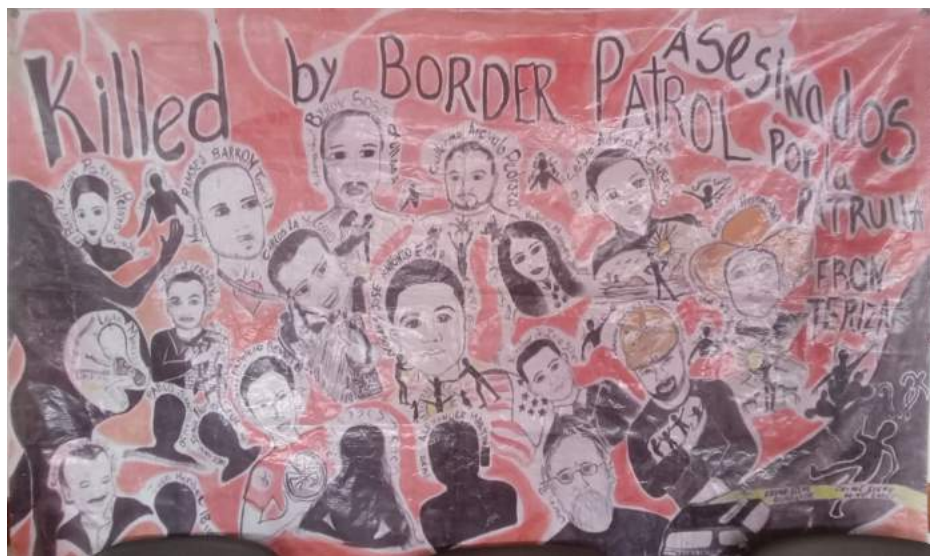
Asimismo, se propuso enviar una invitación al Papa Francisco a través de Teresa Subieta o del cardenal Czerny para que envíe unas palabras de aliento moral a los familiares de las víctimas que se reúnen cada día 10 en la frontera. Hasta el momento no se ha logrado. La Comisión de Convida 20 envió unas palabras de apoyo a los familiares de las víctimas.

En síntesis: El derecho que tiene toda persona es no tener que salir de su país para vivir dignamente. Pero la situación de injusticia, corrupción y violencia existente en los países de origen (sobre todo Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití... sobre todo) obliga a la población a abandonar su tierra.



Es por eso que una tarea para los que trabajamos con migrantes es apoyar a quienes resisten y luchan en estos países para acabar con las políticas injustas, la corrupción, el narcotráfico y las dictaduras que sólo favorecen a los ri-

cos nacionales y a las corporaciones transnacionales, sobre todo extractivas, que provocan la huida y asesinatos de los ciudadanos comunes y líderes sociales que buscan defender sus territorios y su derecho a una vida digna.



Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 números al año.

Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar con nosotros:

- Con una **aportación económica**, haciendo un ingreso en nuestra cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón - ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto "Ocote Encendido".
- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, conocidos... **tejiendo con nosotros una red de información y concientización.**

Si te interesa recibir los "Documentos del Ocote Encendido" o colaborar con nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha. 50.009 - Zaragoza).

Datos del colaborador

Nombre y apellidos:

Dirección: C/.....

C.P: Población:.....

Teléfono: E-mail:.....

Orden de pago a la entidad bancaria

IBAN: _____

Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de _____ euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón.

Firma:

También puedes encontrar el Documento del Ocote en: